Los intereses procesales del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Su relación con los intereses moratorios del artículo 1.108 del Código Civil.

Elena Fernández Ruiz.
Secretario Judicial
1. Introducción......................................................................................................................4

2. Antecedentes históricos: los artículos 921 y 921 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881............................................................................................................................5

   2.1. La vigencia del artículo 921 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 en su redacción original.................................................................5
   2.2. La Ley 77/1980, de 26 de diciembre, por la que se complementa la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881.................................................................5
   2.3. La ley 34/84, de 6 de agosto, de reforma urgente de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881.................................................................6
   2.4. La realidad histórica y la finalidad de las leyes 77/80 (de 26 de diciembre, por la que se complementa la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881) y 34/84 (de 6 de agosto, de reforma urgente de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881)....................7
   2.5. Estudio del artículo 921 de la Ley de Enjuiciamiento Civil tras la reforma de la Ley 34/84, de 6 de agosto, de Reforma Urgente de la Ley de Enjuiciamiento Civil. .................................................................10
      2.5.1. La primera instancia.................................................................11
      2.5.2. El interés pactado.................................................................12
      2.5.3. El razonamiento judicial.................................................................12
   2.6. La regulación actual: el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000. .................................................................................................................................13

3. Concepto del interés procesal ......................................................................................14

4. Distinción del interés moratorio...................................................................................15

   4.1. Referencia al interés moratorio.................................................................15
      4.1.1. Concepto y regulación del interés moratorio. .........................................15
      4.1.2. Requisitos de la mora. .................................................................16
      4.1.3. Momento del devengo.................................................................16
      4.1.4. Cuantía de los intereses moratorios.................................................................18
      4.1.5. Límites a la cuantía de los intereses moratorios........................................20
   4.2. Identificación de los intereses procesales con los moratorios....................21
   4.3. Diferenciación de las dos clases de intereses, moratorios y procesales........22
   4.4. Compatibilidad de los intereses moratorios y procesales..........................27

5. Fundamento del interés procesal..................................................................................35

6. Naturaleza jurídica: el carácter ex lege de los intereses procesales.......................38
6.1. El carácter ex lege en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional................38
6.2. El proceso declarativo y el carácter ex lege.........................................................41
6.3. El proceso de ejecución y el carácter ex lege de los intereses procesales..........46
   6.3.1. La demanda ejecutiva.......................................................................................50
   6.3.2. El auto que despacha la ejecución.................................................................52

7. El régimen jurídico actual de los intereses procesales: el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.................................................................55
   7.1. Ámbito de aplicación..........................................................................................57
       7.1.1. Resoluciones Judiciales..............................................................................61
       7.1.2. La condena a una cantidad líquida..............................................................62
   7.2. El procedimiento de liquidación de los intereses. Su regulación.................62

8. Cuantía de los intereses procesales........................................................................70
   8.1. Dies a quo.........................................................................................................70
   8.2. Dies ad quem....................................................................................................71
   8.3. Tipo de interés..................................................................................................73
   8.4. Cantidad a la que se aplica el tipo de interés..................................................73
   8.5. Orden del pago en la ejecución........................................................................74
   8.6. El anatocismo....................................................................................................79

9. La revocación de la Sentencia y el pago de intereses...........................................85
   9.1. Planteamiento general.......................................................................................85
   9.2. La revocación total............................................................................................86
   9.3. La revocación parcial.......................................................................................86
   9.4. La ejecución provisional...................................................................................88

10. Conclusiones..........................................................................................................89

11. Bibliografía............................................................................................................91
1. Introducción

En el presente trabajo se van a tratar los intereses derivados del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (1/2000), los llamados intereses procesales, que son aquéllos que devenga, desde que es dictada en primera instancia, toda cantidad de dinero líquida a la que se condene en Sentencia o resolución judicial.

El estudio se limitará a los procesos de ejecución en el orden civil. No se hará referencia, por tanto, a procedimientos de otros órdenes jurisdiccionales diferentes del civil, tales como contencioso-administrativo o social. En cuanto a la jurisdicción social, se hará alguna referencia puesto que guarda un gran parecido con la civil, se aplica supletoriamente la legislación procesal civil y, en algunos casos, puede incluso ayudar a entender la voluntad del legislador. Asimismo, tampoco se contemplarán en este estudio las especialidades que, dentro del orden civil, presenta la Hacienda Pública cuando es condenada al pago de intereses. Y por último, para terminar de centrar el tema de este estudio, se excluirán del mismo todas las referencias a los intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro, de tanta aplicación en la práctica pero fuera del tema de este trabajo. El propio artículo 20 excluye en su último número la aplicación de los intereses de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Los llamados intereses procesales se diferenciarán de los que se denominarán en este trabajo intereses civiles (como son los intereses ordinarios o moratorios), que son aquellos que se devengan fuera del proceso civil, o, incluso dentro de éste, pero que traen una causa diferente del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Esta delimitación, que parece conceptualmente sencilla, es confusa en la Jurisprudencia y no unánime en la doctrina, por lo que se tratará detalladamente este punto.

Los intereses procesales en muchas ocasiones alcanzan cuantías elevadas, bien porque la resolución ha condenado al pago de una cantidad elevada o bien porque, sin ser la cuantía de la condena alta, sin embargo ha pasado largo tiempo entre el momento de dictar la sentencia y el pago efectivo de la cantidad. La existencia de diversas posturas jurisprudenciales en la interpretación del precepto se traduce en una diferencia importante de la cantidad que se paga (o se cobra) en concepto de intereses, según la postura que aplique el Tribunal.

La finalidad del presente trabajo es que, una vez estudiadas la ley, la doctrina y la jurisprudencia, se pueda exponer claramente cuáles son los presupuestos para la admisión de la solicitud de intereses procesales, el momento en que comienza el cómputo, su cuantía y la posibilidad o no de compatibilizarse con otros intereses, con la idea de que lo escrito pueda servir al operador jurídico para su práctica forense.

Respecto a la Jurisprudencia, debido a que nos encontramos en el ámbito de la ejecución civil y no en el proceso declarativo (por lo tanto, en un momento temporal posterior a la Sentencia), la jurisprudencia no es tan abundante como la relativa a los
intereses moratorios. Se hará un estudio detallado de las pocas Sentencias y autos del Tribunal Constitucional que han resuelto sobre esta cuestión, así como de la evolución que ha sufrido la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, y, más concretamente, el criterio de algunas Audiencias Provinciales.
2. Antecedentes históricos: los artículos 921 y 921 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881.

Cabe distinguir, en la exposición de los antecedentes históricos del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, entre tres situaciones histórico-legislativas; la vigencia del artículo 921 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.881 en su redacción original, la posterior aprobación del artículo 921 bis en el año 1.980 (ley 77/80 de 26 de diciembre) y la modificación sufrida con la Ley 34/84 de Reforma Urgente de la Ley de Enjuiciamiento Civil (que deroga el artículo 921 bis y modifica el artículo 921).

2.1. La vigencia del artículo 921 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 en su redacción original.

El artículo, tal y como se aprobó decía lo siguiente: “Si la sentencia condenare al pago de cantidad líquida y determinada, se procederá siempre, y sin necesidad de previo requerimiento personal al condenado, al embargo de bienes del deudor, en la forma y por el orden prevenidos para el juicio ejecutivo. Para dicho efecto serán considerados como cantidad líquida los intereses de una cantidad determinada, cuando se haya fijado en la sentencia el tanto por ciento o tipo, y el tiempo por el que deban abonarse.”

Como puede observarse, no hacía referencia a la forma de devengo de intereses o al tipo, si no que se refería al embargo de los bienes del deudor. Por lo tanto, el contenido de este artículo no hace referencia al objeto del presente trabajo.

2.2. La Ley 77/1980, de 26 de diciembre, por la que se complementa la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881.¹

El 26 de diciembre de 1980 se aprueba la Ley 77/80, por la que se añade el artículo 921 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Artículo 921 bis: “cuando la resolución condene al pago de una cantidad líquida, ésta devengará, desde que aquélla fuere dictada hasta que sea totalmente ejecutada, a favor del acreedor, el interés básico o de redescuento fijado por el Banco de España incrementado en dos puntos, salvo que interpuesto recurso fuera revocada totalmente. En los casos de revocación parcial, el Tribunal resolverá con arreglo a su prudente arbitrio. Lo establecido en el párrafo anterior será de aplicación a todo tipo de resoluciones judiciales de cualquier orden jurisdiccional que contengan condena al pago cantidad líquida, salvo las especialidades previstas para la Hacienda Pública por la Ley General Presupuestaria.”

¹ BOE de 30 de diciembre de 1980.
Como se puede observar, en este artículo ya se regulan los intereses procesales como tales.

Dado que se hace referencia al “interés básico o de redescuento”, como referencia para determinar el interés procesal, es necesario apuntar que desde la aprobación del Código Civil\(^2\), las sucesivas leyes modificadoras del artículo 1.108 han ido reduciendo el interés legal hasta el año 1984, cuando se estableció el nuevo sistema de fijar el interés legal según el tipo básico del Banco de España, salvo que la ley de presupuestos estableciera uno diferente\(^3\). Es decir, en un primer momento se establecía un tipo fijo en el Código Civil, y actualmente se fija en Leyes de carácter más administrativo (Leyes de Presupuestos y otras leyes que fijan otro tipo para determinados supuestos, como el Estatuto de los Trabajadores, la Ley Cambiaria y del Cheque…) y también más fluctuante\(^4\). Así, el artículo 1108 del Código Civil en su párrafo segundo, establecía “mientras que no se fije otro por el Gobierno, se considerará como legal el interés del 6 por 100 al año”. Este artículo quedó reducido en la reforma de Ley de 29 de junio de 1984 (Ley 24/84) y fue suprimida de su texto la referencia al interés legal.

Tras la reforma de la citada Ley 24/84, de 29 de junio, quedó el artículo 1108 redactado como sigue: “1. El interés legal se determinará aplicando el tipo básico del Banco de España vigente al día en que comience el devengo de aquél, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca uno diferente. 2. Cualquiera que sea la naturaleza del acto o contrato de que se derive la obligación, el interés que, salvo estipulación en contrario, deberá pagarse por el deudor constituido legítimamente en mora y en los demás casos en que a él sea exigible con arreglo a las leyes, será el determinado conforme a lo previsto en el artículo anterior”.

2.3. La ley 34/84, de 6 de agosto, de reforma urgente de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881.\(^5\)

La ley 34/84, de 6 de agosto de reforma urgente de la Ley de Enjuiciamiento Civil, realiza una doble reforma. Por un lado, deroga el artículo 921 bis y modifica el artículo 921, cuya redacción a partir de este momento y hasta la derogación por la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, será la siguiente:

---

\(^2\) Real Decreto de 24 de julio de 1889.


\(^5\) **BOE** de 7 de agosto de 1984.
“Artículo 921. Si la sentencia condenare al pago de cantidad determinada y líquida se procederá siempre, y sin necesidad de previo requerimiento personal al condenado al embargo de sus bienes en la forma y por el orden prevenido para el juicio ejecutivo.

Para dicho efecto, tendrá la consideración de cantidad líquida los intereses de una cantidad determinada, cuando se haya fijado en la sentencia el tanto por ciento o tipo y el tiempo por el que deban abonarse.

Si la sentencia condenare el pago de una deuda en moneda extranjera, se estará a lo establecido a tales efectos para el juicio ejecutivo.

Cuando la resolución condene al pago de una cantidad líquida, ésta devengará en favor del acreedor, desde que aquélla fuere dictada en primera instancia hasta que sea totalmente ejecutada, un interés anual igual al del interés legal del dinero incrementado en dos puntos, o el que corresponda por pacto de las partes, o disposición especial, salvo que interpuesto recurso la resolución fuere totalmente revocada. En los casos de revocación parcial, el Tribunal resolverá conforme a su prudente arbitrio, razonándolo al efecto.

Lo establecido en el párrafo anterior será de aplicación a todo tipo de resoluciones judiciales de cualquier orden jurisdiccional que contengan condena al pago de cantidad líquida, salvo las especialidades previstas para la Hacienda pública por la Ley General Presupuestaria.”

2.4. La realidad histórica y la finalidad de las leyes 77/80 (de 26 de diciembre, por la que se complementa la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881) y 34/84 (de 6 de agosto, de reforma urgente de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881).

PADURA BALLESTEROS hace un estudio del ámbito social y crediticio existente en el momento de aprobación del artículo 921 bis y su posterior derogación, estudio que servirá de guía a lo largo de este epígrafe.

La realidad en el momento de aprobación del artículo 921 bis y de su posterior derogación, tanto procesal (falta de regulación de la ejecución provisional) como económica (alta inflación y bajos intereses) llevó a que existieran muchos abusos por parte de los deudores, porque, en esencia, salía más barato incumplir la obligación y posteriormente cumplirla cuando así fuera obligatorio por sentencia firme. Es decir; se acababa pagando menos dinero si se recurría en vez de cumplir la primera Sentencia.

Así, expone la autora que la legislación vigente en el momento de redacción del artículo favorecía desmesuradamente al deudor, por tres factores principales: la elevada tasa de inflación, la doctrina de la liquidez del Tribunal Supremo y las dilaciones procesales en la tramitación judicial. A fin de explicar el punto de vista de la autora de manera sistemática se hará referencia separada a los dos primeros factores antedichos:

PADURA BALLESTEROS, M: Los intereses procesales por demora: su fundamento, régimen legal y jurisprudencia, Trivium, Madrid, 1.999, págs. 44 y ss.
En cuanto a la doctrina del Tribunal Supremo, que establece que “in illiquidis non fit mora”, supone la necesidad de que la deuda sea líquida para que se produzca la mora. Es decir; añade un nuevo requisito a la mora de las obligaciones. Este requisito es de creación jurisprudencial, puesto que no aparece en el Código Civil en la regulación de la mora.

Los requisitos de la mora se regulan en el artículo 1.100 del Código Civil, que reza:

“Incurren en mora los obligados a entregar o a hacer alguna cosa desde que el acreedor les exija judicial o extrajudicialmente el cumplimiento de su obligación. No será, sin embargo, necesaria la intimación del acreedor para que la mora exista: 1. Cuando la obligación o la ley lo declaren así expresamente. 2. Cuando de su naturaleza y circunstancias resulte que la designación de la época en que había de entregarse la cosa o hacerse el servicio, fue motivo determinante para establecer la obligación. En las obligaciones recíprocas ninguno de los obligados incurre en mora si el otro no cumple o no se allana a cumplir debidamente lo que le incumbe. Desde que uno de los obligados cumple su obligación, empieza la mora para el otro.”

Si bien en un primer momento el Tribunal Supremo entiende que existe liquidez atendiendo indistintamente a varios criterios, sin embargo, con el paso del tiempo, se excluyen otros y queda únicamente como sinónimo de liquidez el criterio de que la sentencia condena al deudor a pagar exactamente la misma cantidad solicitada en la demanda.

Ello llevó a que cuando la Sentencia de instancia no condenaba al pago de exactamente la cantidad solicitada en la demanda, se eximía al deudor del pago de intereses moratorios por falta de liquidez, y no consideraba que se producía la mora hasta la última sentencia condenando al pago. Porque no cabe la mora mientras no

7 Como ejemplo, la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 4 de noviembre de 1991, ponente Martín-Granizo Fernández, EDJ 1991/10397. En esta Sentencia el Tribunal de Instancia resuelve dos demandas, la principal y la reconvencional. Estimó parcialmente ambas demandas, condenando a los demandados a pagar una cantidad más los intereses legales desde el momento de interposición de la demanda y a los actores a abonar una cantidad sin intereses. En apelación se resolvió estimar parcialmente el recurso de los demandados y actores reconvinentes, condenando a pagar a los demandados una cantidad menor a la condenada en primera instancia más los intereses legales de dicha suma desde la fecha de la presente Sentencia.” Se recurre en casación alegando, entre otros motivos, infracción de los artículos 1.101 y 1.108 del Código Civil y 921 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Fundamenta el Tribunal Supremo:

“La motivación está condenada al fracaso casacional ya que al formularla no se ha tenido en cuenta por el recurrente:

Primero.- Que es doctrina constante de esta Sala la que no producen intereses las cantidades ilíquidas, dado que dicha iliquidez es incompatible con esa determinación;

Segundo.- Que a tales efectos, se entiende hay iliquidez cuando el quantum reclamado ha de fijarse o se determina en la Sentencia como resultado de la prueba practicada;
hay que cumplir, y no habrá que cumplir en tanto no se sepa cuánto hay que cumplir (ignorancia razonable o excusable), es decir, en tanto no haya liquidez.

Por vía de esta interpretación se llegó al absurdo de que si la sentencia no daba exactamente la misma cantidad solicitada en la demanda (aunque la diferencia fuera de céntimos) se entendía que no había mora y, por tanto, tampoco derecho al cobro de intereses moratorios.

En palabras de Padura Ballesteros "semejante sistema propiciaba todo tipo de ardid por parte de los astutos deudores, quienes, además de agotar todos los recursos posibles y dilatar los procesos, se beneficiaban del diferencial entre la inflación del momento y el interés legal entonces vigente (un 4 por 100). Por el contrario, el acreedor –amedrentado– prefería conformarse con la cantidad que le reconocía la primera sentencia, a perder intereses en aplicación del principio in illiquidis non fit mora (al margen de la delicada situación en la que se encontraba a la hora de redactar la demanda, pues ni podía pedir más –porque entonces perdía todos los intereses– ni menos, –porque entonces perdía parte del capital)".

Por lo tanto, al acreedor más le valía no recurrir y conformarse con lo que le hubiera dado el juzgador de primera instancia.

Solo a partir del año 1992 se puede decir que la situación cambió en la jurisprudencia, que flexibilizó la interpretación del principio de la iliquidez, pero eso será más de diez años después del panorama que se está describiendo.

Por otro lado, continúa Padura Ballesteros explicando la situación histórica de los años 80 haciendo referencia al interés legal reinante. El interés legal del dinero se situó en un 4 por 100 (siendo el interés básico del Banco de España de un 8 por 100), tipo que se encontraba vigente desde 1.939 (por reforma del artículo 1.108 del Código Civil). Y la media de la resolución del pleito hasta la Sentencia del Tribunal Supremo era de cuatro a cinco años. Es decir, que el acreedor, en el caso de que obtuviera un pronunciamiento favorable al pago de intereses de demora, recibía un interés bajísimo, y más si se compara con la tasa de inflación, con lo que perdía dinero litigando en el ejercicio legítimo de su derecho.

Padura Ballesteros explica asimismo que en este contexto se dictan las leyes 77/80 y la posterior 24/84. Por otro lado, mediante ley se eleva el interés de
demora en las deudas tributarias y se eleva el interés básico o de redescuento fijado por el Banco de España, que se hace coincidir con el interés legal.

Porque si el interés bancario era superior al legal del dinero, al deudor le interesaba no pagar, hacer rentar ese dinero simplemente ingresándolo en una cuenta bancaria y esperar a pagar, como mínimo, a que hubiera una primera resolución judicial.

En resumen, se trata con la reforma de proteger al acreedor, a fin de que no sea económicamente más beneficioso esperar a la resolución judicial final que cumplir en el plazo que establece la obligación.

Por todo lo expuesto, considera Padura Ballesteros\textsuperscript{13} que el objetivo de la reforma de la ley era obligar al deudor cumplir en plazo las obligaciones, acabar con una situación de incumplimiento sistemático de las deudas dinerarias debido a la ineficacia de la institución existente.

2.5. Estudio del artículo 921 de la Ley de Enjuiciamiento Civil tras la reforma de la Ley 34/84\textsuperscript{14}, de 6 de agosto, de Reforma Urgente de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Tal y como se ha expuesto en un epígrafe precedente, la ley 34/84 realiza una doble reforma. Por un lado, deroga el artículo 921 bis y modifica el artículo 921, cuya redacción a partir de este momento y hasta la derogación por la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, seguirá siendo la misma.

La ley 34/84 reforma el artículo 921 de la Ley de Enjuiciamiento en varios aspectos: en primer lugar, se añade la referencia a la primera instancia, en segundo lugar se sustituye el concepto del interés básico o de redescuento por el interés legal del dinero, en tercer lugar se añade la posibilidad de que el interés que se devengue sea el pactado o el fijado por disposición especial y, en cuarto y último lugar, que, en casos de revocación parcial, el Tribunal deberá razonar su decisión en cuanto a los intereses.

El precepto se reforma, quedando redactado el artículo 921 como sigue “cuando la resolución condene al pago de una cantidad líquida, ésta devengará, en favor del acreedor, desde que aquélla fuere dictada en primera instancia hasta que sea totalmente ejecutada, un interés anual igual al del interés legal del dinero incrementado en dos puntos, o el que corresponda por pacto de las partes o por disposición especial, salvo que interpuesto recurso fuera totalmente revocada. En los casos de revocación parcial, el Tribunal resolverá con arreglo a su prudente arbitrio, razonándolo al efecto. Lo establecido en el párrafo anterior será de aplicación a todo tipo de resoluciones judiciales de cualquier orden jurisdiccional que

\textsuperscript{13} Padura Ballesteros, M.: \textit{Los intereses procesales por demora...} op.cit, págs. 44 y ss.

\textsuperscript{14} BOE de 7 de agosto de 1984.
contengan condena al pago de cantidad líquida, salvo las especialidades previstas para la Hacienda Pública por la Ley General Presupuestaria”.

Se van a analizar por separado los aspectos en que se modificó el artículo 921 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.881 en la Ley 34/84. A efectos de lograr una mayor claridad en la exposición, se repetirá el artículo en cada punto subrayando únicamente la parte que se va a tratar a continuación.

2.5.1. La primera instancia.

Tras la reforma de la ley 34/84, queda el artículo 921 redactado como sigue:

“cuando la resolución condene al pago de una cantidad líquida, ésta devengará, en favor del acreedor, desde que aquélla fuere dictada en primera instancia hasta que sea totalmente ejecutada, un interés anual igual al del interés legal del dinero incrementado en dos puntos, o el que corresponda por pacto de las partes o por disposición especial, salvo que interpuesto recurso fuera totalmente revocada. En los casos de revocación parcial, el Tribunal resolverá con arreglo a su prudente arbitrio, razonándolo al efecto. Lo establecido en el párrafo anterior será de aplicación a todo tipo de resoluciones judiciales de cualquier orden jurisdiccional que contengan condena al pago de cantidad líquida, salvo las especialidades previstas para la Hacienda Pública por la Ley General Presupuestaria”.

Esta modificación viene a aclarar la aplicación del artículo, dado que daba lugar a diversidad de interpretaciones sobre cuál era el momento en que se iniciaba el cómputo de intereses. Se podría decir que la modificación introducida se decanta claramente por una interpretación favorable al acreedor, dado que no puede entenderse que los intereses se devengan desde que la resolución o Sentencia es firme (segunda o última instancia), sino desde que se dicta por primera vez (primera instancia), de forma que se devengan intereses todo el tiempo desde que se dicta, en tanto se tramitan y resuelven los recursos a la misma. Sin embargo, con la otra interpretación, si se devengan intereses desde que la Sentencia o resolución es firme, no se cobrarían los intereses procesales desde que se dicta por primera vez la Sentencia o resolución hasta que ésta adquiere firmeza.

No obstante, el punto de vista de que esta interpretación de la nueva redacción del artículo es favorable al acreedor es únicamente aparente, ya que podría ocurrir que los intereses procesales fueran menores que los intereses civiles (imaginemos un préstamo al 29 por 100 de interés) y que el devengo de aquéllos excluyera el de éstos. En estos casos esta interpretación perjudicaría al acreedor. En cualquier caso, la modificación lo que claramente aportó fue seguridad jurídica, siempre deseable en la aplicación práctica del derecho.

2.5.2. El interés pactado

Tras la reforma de la ley 34/84, queda el artículo 921 redactado como sigue:
“cuando la resolución condene al pago de una cantidad líquida, ésta devengará, en favor del acreedor, desde que aquélla fuere dictada en primera instancia hasta que sea totalmente ejecutada, un interés anual igual al del interés legal del dinero incrementado en dos puntos, o el que corresponda por pacto de las partes o por disposición especial, salvo que interpuesto recurso fuera totalmente revocada. En los casos de revocación parcial, el, Tribunal resolverá con arreglo a su prudente arbitrio, razonándolo al efecto. Lo establecido en el párrafo anterior será de aplicación a todo tipo de resoluciones judiciales de cualquier orden jurisdiccional que contengan condena al pago de cantidad líquida, salvo las especialidades previstas para la Hacienda Pública por la Ley General Presupuestaria”.

La regulación relativa al interés se modifica en dos aspectos: primero, la cuantía; segundo, se incluye una referencia al interés pactado.

En lo relativo a la cuantía, sustituye la referencia al interés básico o de redescuento del Banco de España por el interés legal del dinero.

En segundo lugar, se incluye una referencia a los intereses pactados o los que deban aplicarse por disposición especial.

Aqui se plantea un gran problema interpretativo que ha llegado hasta nuestros días, cual es el sentido del pacto de las partes. Es decir, ¿se refiere a la posibilidad de pactar un tipo de interés legal superior al de dos puntos o a la posibilidad de sumar al interés procesal otro tipo de intereses, como, por ejemplo, el moratorio?. Este tema se tratará más adelante.

2.5.3. El razonamiento judicial

Tras la reforma de la ley 34/84, queda el artículo 921 redactado como sigue:

“cuando la resolución condene al pago de una cantidad líquida, ésta devengará, en favor del acreedor, desde que aquélla fuere dictada en primera instancia hasta que sea totalmente ejecutada, un interés anual igual al del interés legal del dinero incrementado en dos puntos, o el que corresponda por pacto de las partes o por disposición especial, salvo que interpuesto recurso fuera totalmente revocada. En los casos de revocación parcial, el, Tribunal resolverá con arreglo a su prudente arbitrio, razonándolo al efecto. Lo establecido en el párrafo anterior será de aplicación a todo tipo de resoluciones judiciales de cualquier orden jurisdiccional que contengan condena al pago de cantidad líquida, salvo las especialidades previstas para la Hacienda Pública por la Ley General Presupuestaria”.

Esta modificación del artículo 921 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 únicamente viene a incluir el requisito de la necesidad de motivación judicial de la decisión en torno a los intereses que deberán devengarse en caso de revocación parcial de la Sentencia o resolución. En cualquier caso, entiendo que este cambio es simplemente una aplicación concreta de la obligación general de motivación de las

15 Padura Ballesteros, M. T.: Los intereses procesales por demora..., op.cit., pág 18.
resoluciones judiciales prevista en los artículos 247 y 248 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y concordantes de las distintas leyes procesales.


Artículo 576. “Intereses de la mora procesal

1. Desde que fuere dictada en primera instancia, toda sentencia o resolución que condene al pago de una cantidad de dinero líquida determinará, en favor del acreedor, el devengo de un interés anual igual al del interés legal del dinero incrementado en dos puntos o el que corresponda por pacto de las partes o por disposición especial de la ley.

2. En los casos de revocación parcial, el tribunal resolverá sobre los intereses de demora procesal conforme a su prudente arbitrio, razonándolo al efecto.

3. Lo establecido en los anteriores apartados será de aplicación a todo tipo de resoluciones judiciales de cualquier orden jurisdiccional que contengan condena al pago de cantidad líquida, salvo las especialidades legalmente previstas para las Haciendas Públicas.”

Si se compara con la redacción del artículo 921 tras su última reforma, vemos que en esencia es igual, incluso idéntica en el segundo y tercer párrafo, aunque en el primer párrafo se ha mejorado un poco la redacción.

El artículo 921 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.881 tras la reforma de la Ley 34/84, de 6 de agosto, quedó redactado como sigue:

“Cuando la resolución condene al pago de una cantidad líquida, ésta devengará, en favor del acreedor, desde que aquélla fuere dictada en primera instancia hasta que sea totalmente ejecutada, un interés anual igual al del interés legal del dinero incrementado en dos puntos, o el que corresponda por pacto de las partes o por disposición especial, salvo que interpuesto recurso fuera totalmente revocada.

En los casos de revocación parcial, el, Tribunal resolverá con arreglo a su prudente arbitrio, razonándolo al efecto.

Lo establecido en el párrafo anterior será de aplicación a todo tipo de resoluciones judiciales de cualquier orden jurisdiccional que contengan condena al pago de cantidad líquida, salvo las especialidades previstas para la Hacienda Pública por la Ley General Presupuestaria”.

Por lo tanto, las diferencias son estrictamente de técnica jurídica. Así, en el artículo 921 habla de “cuando la resolución condene al pago” mientras que en el vigente artículo 576 habla de “Desde que fuere dictada…toda sentencia o resolución
que condene al pago”. Es por ello que se concluye que la regulación no se ha modificado con la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000.
3. Concepto del interés procesal

En una primera aproximación se puede definir el interés procesal como aquél que nace de una resolución judicial que condena al pago de una cantidad líquida. O, más concretamente, podrían definirse como aquellos intereses que obtiene quien tiene a su favor una Sentencia o resolución que acoge sus pretensiones, que se devengan desde que ésta es dictada en primera instancia hasta que dicho sujeto (demandante, ejecutante) ha cobrado el total montante de la misma.

Si nos atenemos a su finalidad, los intereses procesales pueden definirse como aquéllos que tienen por finalidad resarcir al acreedor o favorecido por la resolución judicial de la pérdida de poder adquisitivo ocurrida durante el tiempo en que deja de cobrar esa cantidad que le corresponde según la resolución judicial porque el deudor no la ha abonado (atendiendo al fin resarcitorio). Haciendo referencia al fundamento punitivo o sancionador, los intereses procesales serían aquéllos con los que se castiga al obligado al pago de una cantidad por resolución judicial que utiliza maniobras dilatorias para no realizar dicho pago.

En cuanto a los sujetos, este interés nace a favor de quien ha sido beneficiado por la condena y deberá ser abonado por quien ha sido condenado al pago de la cantidad prevista en la condena o principal.

Si se atiende a su cuantía, está prevista en el artículado y es siempre conocida de antemano, puesto que será el interés legal del dinero incrementado en dos puntos o el que corresponda por pacto de las partes o por disposición especial de la ley.
4. Distinción del interés moratorio.

4.1. Referencia al interés moratorio.

En este epígrafe se hará una referencia al interés moratorio, a fin de distinguir el interés moratorio del procesal. Se tratarán, de modo diferenciado, los aspectos más relevantes que diferencian este tipo de interés del procesal. Así, se estudiarán los siguientes puntos: concepto y regulación del interés moratorio, los requisitos de la mora, el momento del devengo del interés moratorio y su cuantía.

4.1.1. Concepto y regulación del interés moratorio.

La mora se define en el artículo 1.100 del Código Civil, que nos dice “incurren en mora los obligados a entregar o a hacer alguna cosa desde que el acreedor les exija judicial o extrajudicialmente el cumplimiento de su obligación”. La consecuencia de incurrir en mora es que el deudor deberá abonar una indemnización al acreedor, prevista en el artículo 1.101 del Código Civil: “quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en... morosidad...”.

En las obligaciones de tipo pecuniario, el artículo 1.108 del Código Civil establece que “si la obligación consistiere en el pago de una cantidad de dinero y el deudor incurriere en mora, la indemnización de daños y perjuicios, no habiendo pacto en contrario, consistirá en el pago de los intereses convenidos y, a falta de convenio, en el interés legal”.

Según lo expuesto, podemos definir los intereses moratorios como “aquellos que tienen por finalidad la indemnización o el resarcimiento del daño causado al acreedor por el retraso en el cumplimiento de una obligación pecuniaria”.

Por lo tanto, en el caso de las obligaciones pecuniarias, por incurrir en mora el deudor, el acreedor adquiere el derecho a cobrar intereses sin deber probar si ha sufrido o no daño por la mora del deudor ni tampoco probar cuánto daño ha sufrido, sino que directamente la indemnización por daños y perjuicios se fija en el interés legal, a falta de otro interés pactado. Es lo que se llama una cantidad a forfait.

En nuestro ordenamiento jurídico no está expresamente prevista en el Código Civil la posibilidad de exigir la existencia de un daño mayor que el que se va a indemnizar con el interés moratorio, aunque pueda probarse, a diferencia de lo que ocurre en otros casos en derecho comparado. El Código Civil español guarda silencio sobre la posibilidad del resarcimiento del mayor daño, al contrario de lo que ocurre en el Código Civil italiano, en que si se regula dicha posibilidad. Únicamente se prevén ciertos artículos para casos particulares en que puede

resarcirse mayor daño, como son los artículos 1.682, 1.838, 1.724 y 1.718 del Código Civil. En cualquier caso, la regulación del artículo 1.108 del Código Civil tiene la ventaja de no ser necesario probar el daño para recibir indemnización por mora.

Pese al silencio legal, la mayoría de la doctrina científica admite la posibilidad que tiene el acreedor de probar la existencia de un daño mayor en los casos en que el interés moratorio es el legal (no cuando es convencional, donde ya se han previsto o debido prever todos los riesgos posibles) Ello debido al carácter dispositivo del artículo 1.108 y a la libertad de pactos contractual que existe en nuestro ordenamiento jurídico. Es incluso posible que se pacte que la indemnización será el daño realmente sufrido. Este caso no es frecuente, pero sí posible.

4.1.2. Requisitos de la mora.

Para que nazcan los intereses moratorios, será necesario que se cumplan los requisitos para que el deudor incurra en mora: exigibilidad de la deuda, retraso del deudor en el pago de una cantidad de dinero, intimación al deudor en el caso de que ésta sea necesaria, deuda líquida y, según la corriente doctrinal que se siga, imputabilidad o culpabilidad en el retraso.

Así, Santos Briz afirma que existe duda en cuanto a si es requisito de la mora la conducta culpable del deudor. Entiende este autor que, conforme a corrientes más modernas objetivadoras de la responsabilidad, el deudor puede incurrir en mora con la sola acreditación del retraso en el cumplimiento, sin exigir que sea culpable. Únicamente le exime del resarcimiento el caso fortuito o la fuerza mayor, y siempre que sean anteriores en el tiempo a la mora.

---

18 Artículo 1.682 del Código Civil: “El socio que se ha obligado a aportar una suma en dinero y no la ha aportado, es de derecho deudor de los intereses desde el día en que debió aportarla, sin perjuicio de indemnizar además los daños que hubiese causado. Lo mismo tiene lugar respecto a las sumas que hubiese tomado de la caja social, principiando a contarse los intereses desde el día en que las tomó para su beneficio particular.”

Artículo 1.838 del Código Civil: “El fiador que paga por el deudor debe ser indemnizado por éste. La indemnización comprende: 1. La cantidad total de la deuda. 2. Los intereses legales de ella desde que se haya hecho saber el pago al deudor, aunque no los produjese para el acreedor. 3. Los gastos ocasionados al fiador después de poner éste en conocimiento del deudor que ha sido requerido para el pago. 4. Los daños y perjuicios, cuando procedan. La disposición de este artículo tiene lugar aunque la fianza se haya dado ignorando el deudor.”

Artículo 1.718 del Código Civil: “El mandatario queda obligado por la aceptación a cumplir el mandato, y responde de los daños y perjuicios que, de no ejecutarlo, se occasionen al mandante. Debe también acabar el negocio que ya estuviese comenzado al morir el mandante, si hubiere peligro en la tardanza.”

Artículo 1.724 del Código Civil: “El mandatario debe intereses de las cantidades que aplicó a usos propios desde el día en que lo hizo, y de las que quede debiendo después de fenecido el mandato, desde que se haya constituido en mora.”

19 Establece el artículo 1.255 del Código Civil: “Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público.”


4.1.3. Momento del devengo.

Doctrinalmente, la opinión mayoritaria es que el momento de devengo de los intereses es la constitución en mora del deudor, y a su vez, que la mora se constituye en el momento de incumplimiento de la obligación. Sin embargo, hay quien entiende que el momento de devengo de los intereses moratorios es disponible por las partes, ya que éstas podrán pactar una fecha diferente a la de constitución en mora del deudor. En este sentido, SANTOS BRIZ expone que existe controversia doctrinal en cuanto al momento de inicio de devengo de intereses moratorios en torno a tres momentos: la fecha de la presentación de la demanda o requerimiento extrajudicial, el emplazamiento del demandado o contestación a la demanda y, por último, la fecha de la sentencia. Sin embargo, no aclara este autor cuál es la postura que considera más adecuada.

Jurisprudencialmente, la doctrina mayoritaria del Tribunal Supremo es fijar la fecha de comienzo del devengo de los intereses procesales en el momento de presentación de la demanda o requerimiento extrajudicial. Así, en la Sentencia de once de noviembre de 1999 se argumenta la utilización de este criterio.

En la Sentencia recurrida se condenó al pago de intereses moratorios desde la fecha de la presentación de la demanda, y se recurrió alegando que “los intereses moratorios del artículo 1.100 no se devengan, como dice la Sentencia desde la fecha de interposición de la demanda que estableció la relación procesal, sino desde la terminación de las obras”. Sin embargo, el Tribunal Supremo argumenta que “En la fecha (de terminación de las obras) no consta (ni con posterioridad) se hubiera efectuado reclamación extrajudicial de la cantidad dicha, con lo que la aplicación de situación de mora sólo tiene lugar a partir de la demanda por no anteceder intimidación al deudor para que cumpliera sus obligaciones.”

En cuanto al requisito de la liquidez, ha sido tradicionalmente exigido por doctrina y Jurisprudencia. En este sentido, afirma ALBÁCAR LÓPEZ “para que la obligación vencida devenga intereses legales, se requiere que sea exigible y líquida. En supuesto de reclamación judicial por cantidad líquida desde que se le reclame judicialmente, es decir, desde el momento en que empieza la litispendencia, siempre que se le condene al pago de la suma reclamada líquida, y no cuando la condena es por cantidad inferior o cuando ha de determinarse en ejecución de sentencia...”. Jurisprudencialmente, se exigió desde antiguo que, para devengar intereses moratorios, la cantidad debía ser líquida. En palabras del Tribunal Supremo, “sólo si la cantidad es líquida se deben intereses, y si la liquidez se determina en la sentencia

25 ALBÁCAR LÓPEZ, J., y otros.: Código Civil. Doctrina y Jurisprudencia, op. cit., pág. 120.
su abono sólo procede desde que ésta ha adquirido firmeza, en ortodoxa aplicación del principio, de que «in illiquidis non fit mora.»

Sin embargo, actualmente se ha desechado la teoría del “in illiquidis non fit mora”. Así, la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de noviembre de 2007. La cita es larga pero merece la pena su lectura:

“la mera invocación de que la determinación del quantum de la deuda precisó del proceso judicial, el cual, se dice, fue necesario para resolver la discrepancia existente al respecto entre los interesados, no puede operar como causa excluyente, en todo caso, de la condena al pago de los intereses desde la interposición de la demanda.

De entenderse de otro modo, como pretende la parte recurrente, supone estimular el retraso en el pago, con el premio añadido del disfrute del dinero debido sin contraprestación alguna a favor del acreedor, desconociendo que el mismo es un producto frutífero, pues bastaría expresar la mera disconformidad y esperar a la simple desarmonía entre la suma postulada y la judicialmente determinada, sin ningún tipo de consignación, para que no procediera la concesión de intereses.

Ciertamente, durante mucho tiempo, la doctrina jurisprudencial, a través de la exigencia de la liquidez y con apoyo en el principio (en realidad regla, o aforismo) de "in illiquis non fit mora" (sin base histórica, ni de derecho positivo), vino manteniendo un criterio muy riguroso al requerir, prácticamente y de modo general, la coincidencia de la suma concedida con la suplicada para que pudiera condenarse al pago de los intereses legales desde la interpelación judicial. La exigencia fue atenuada a partir de la Sentencia de 5 de marzo de 1992 y otras muchas posteriores, que sustituye la coincidencia matemática por la "sustancial", de modo que una diferencia no desproporcionada de lo concedido con lo pedido no resulta obstáculo al otorgamiento de intereses. A partir del Acuerdo de esta Sala 1ª de 20 de diciembre de 2005 se consolida una nueva orientación, que, prescindiendo del alcance dado a la regla in illiquis non fit mora, atiende al canon de la razonabilidad en la oposición para decidir la procedencia de condenar o no al pago de intereses y concreción del dies a quo del devengo.

Este moderno criterio, que da mejor respuesta a la naturaleza de la obligación y al justo equilibrio de los intereses en juego, y en definitiva a la plenitud de la tutela judicial, toma como pautas de la razonabilidad el fundamento de la reclamación, las razones de la oposición, la conducta de la parte demandada en orden a la liquidación y pago de lo adeudado, y demás circunstancias concurrentes, por lo que la solución exige una especial contemplación del caso enjuiciado.”

26 Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de marzo de 1990, Sala de lo Civil, Ponente Fernández Rodríguez, RJ Aranzadi 1990/1986
En cuanto al momento del devengo de los intereses moratorios, el criterio general de la Jurisprudencia es fijar el dies a quo en el momento de presentación de la demanda. Así lo recuerda el Tribunal Supremo en su Sentencia de 16 de noviembre de 2007: “porque la doctrina jurisprudencial ha venido siempre entendiendo, como regla general y con escasas excepciones (algunas resoluciones aisladas tomaron en cuenta la fecha del emplazamiento), que, cuando no se expresa otra fecha, ha de estarse a la de la interpelación judicial (artículo 1.100 del Código Civil) que se produce por la presentación de la demanda admitida, momento procesal en el que se produce la litispendencia, tal y como se recoge actualmente en el artículo 410 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000.”

4.1.4. Cuantía de los intereses moratorios.

Tal y como se ha dicho más arriba, el artículo 1.101 del Código Civil impone el pago de indemnización por daños y perjuicios al deudor que incurre en mora. La cuantía de esta indemnización se fija en el artículo 1.106, que establece: “La indemnización de daños y perjuicios comprende, no sólo el valor de la pérdida que hayan sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el acreedor, salvas las disposiciones contenidas en los artículos siguientes.”. La especialidad de las obligaciones pecuniarias está en que la indemnización por mora es fijada a forfait bajo la forma de un interés legal. El acreedor no necesita probar la existencia real de perjuicio, sino que se deduce de la falta de disponibilidad de una suma que se considera fructífera.

Según el artículo 1.108 del Código Civil la indemnización por mora consistirá en el pago de los intereses convenidos, y, a falta de pacto, en el interés legal. Asimismo, el artículo 316 del Código de Comercio establece el pago del interés legal en defecto del convencional para el caso de los préstamos mercantiles.

Se plantea el supuesto de que el daño causado al acreedor por la mora sea mucho mayor que el resarcible mediante el pago del interés legal. Teniendo en cuenta la regulación del Código Civil, ¿es posible determinar un interés superior probando aquellos daños?. Es claro que debemos excluir aquellos supuestos en que se pactó un interés para el caso de la mora del deudor, puesto que debemos estar al pacto. Pero, ¿y cuándo no se pactó?. El artículo 1.107 determina cuáles son los daños de que debe responder el deudor que incumple una obligación. Y distingue entre el deudor de buena fe y el de mala fe o existencia de dolo. El deudor de buena fe solo responde de “... los daños y perjuicios previstos y que se hayan podido prever al tiempo de constituirse la obligación y que sean consecuencia necesaria de la falta de cumplimiento”. Sin

---


embargo, en caso de dolo, “responderá el deudor de todos los que conociéndamente se deriven de la falta de cumplimiento de la obligación”.

En cuanto al concepto de dolo, la Jurisprudencia establece que para actuar dolosamente no es necesaria la voluntad de dañar o el animus nocendi, siendo bastante la voluntad consciente de incumplir. En este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de noviembre de 1999. El supuesto de hecho es el siguiente: tanto la sentencia de instancia como la de apelación condenan al demandado por la resolución unilateral del contrato al pago de los daños causados más una indemnización por daños y perjuicios, por considerar dolosa la actuación del mismo en la ejecución del contrato. Argumenta el Tribunal Supremo: “el artículo 1107 del Código Civil, que contrapone la buena fe al dolo y hace coincidir éste con la mala fe y para ello no se precisa la intención de perjudicar y basta tan sólo con infringir de modo voluntario el deber jurídico que pesaba sobre el deudor, conscientemente.”

Cuando se trate de obligaciones pecuniarias cuyo cumplimiento se extienda a más de un año, la solución jurisprudencial ha consistido en aplicar el artículo 451 del Código Civil, que determina que los frutos civiles se consideran producidos por días, de modo que el cómputo se hace con el tipo de interés vigente en cada día que se devenga. En cuanto a la modificación del tipo de interés durante el tiempo que se devenga el interés moratorio, apunta SANTOS BRIZ que el interés aplicable se adopta desde el día en que comience su devengo, sin alteración posterior alguna en su cuantía, aunque el tipo legal se modifique más adelante. Ello se debe al principio de irretroactividad de las leyes.

4.1.5. Límites a la cuantía de los intereses moratorios.

En cuanto a los límites a la cuantía de los intereses moratorios, tal y como establece ORDÁS ALONSO, sólo existen dos: el artículo 1.255 del Código Civil (la autonomía de la voluntad contractual) y la Ley de la Usura de 23 de julio de 1.908.

En mi opinión, se puede incluir un límite más, cual es el retraso desleal en el ejercicio del derecho, tal y como se expondrá después.

La Ley de la Usura es una legislación centenaria que se dictó para poner freno a las prácticas abusivas de los antiguos prestamistas, debido a que el interés que se pactaba era enteramente convencional. Si bien es necesario, a la hora de aplicarla, adaptarla a las nuevas circunstancias crediticias, cual es la sustitución del prestamista por la entidad de crédito o Banco. Según su principal autor, D. Gumersindo de Azcárate, la ley no trataba de eliminar el principio de la autonomía

---

30 Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de noviembre de 1999, Sala Civil, número de Sentencia 1011/1999, ponente Martínez-Pereda Rodríguez, RJ Aranzadi 1999/8439.
32 Artículo 2.3 del Código Civil “Las Leyes no tendrán efecto retroactivo si no dispusieren lo contrario.”
de la voluntad, sino de declarar la nulidad de aquellos contratos de préstamo que, por las condiciones en que se han llevado a cabo, “implican una falta real y positiva de conocimiento, esto es, un vicio en el fondo y, además, por aquella relación delicada en que se encuentra el orden jurídico con el orden ético que obliga al primero a imponer ciertas sanciones a las infracciones del segundo.”.

La citada ley no fija una tasa de interés, superada la cual el contrato es usurario y, por tanto, nulo, sino que es establece unos criterios que servirán al Tribunal para declararlo como tal. Esto ha hecho que, en opinión de la ORDÁS ALONSO, pueda continuar hoy vigente y aplicable, puesto que el tipo de interés “normal” varía mucho de unos años a otros y deben tenerse en cuenta todas las circunstancias.

En cuanto al retraso desleal, el Tribunal Supremo ha elaborado una doctrina sobre buena fe en el ejercicio de los derechos e interdicción del abuso en los mismos en relación con el retraso desleal. En este sentido actúa contra la buena fe el que ejercita un derecho tan tardíamente que la otra parte pudo racionalmente pensar que no iba a ejercitarlo. El Código Civil sanciona el abuso del derecho o el ejercicio antisocial de los mismos en el artículo 7.2., de modo que dicha conducta dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso.

En palabras del propio Tribunal Supremo34, “se falta a la buena fe cuando se va ‘contra la resultancia de los actos propios, se realiza un acto equívoco para beneficiarse intencionadamente de su dudosa significación o se crea una apariencia jurídica para contradecirla después en perjuicio de quien puso su confianza en ella’, señalando también la doctrina científica moderna más autorizada que actúa contra la buena fe el que ejercita un derecho en contradicción con su anterior conducta en la que hizo confiar a otro -prohibición de ir contra los actos propios-, y especialmente infringe el mismo principio el que ejercita su derecho tan tardíamente que la otra parte pudo efectivamente pensar que no iba a actuarlo -retraso desleal-, vulnerando, tanto la contradicción con los actos propios, como el retraso desleal, las normas éticas que deben informar el ejercicio del derecho, las que lejos de carecer de trascendencia, determinan el que el ejercicio del derecho se torne inadmisible, con la consiguiente posibilidad de impugnarlo por antijurídico al amparo de la preceptiva contenida en el artículo 7.º del Código Civil.”

4.2. Identificación de los intereses procesales con los moratorios.

Este epígrafe y el siguiente tratan de contestar a la cuestión de si los intereses procesales constituyen o no un ente diferenciado de los moratorios. En este epígrafe se hará referencia a aquella Jurisprudencia que ha identificado ambos tipos de intereses.

---

34 Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 1982, Sala de lo Civil, ponente Sánchez Jáuregui, RJ Aranzadi 1982/2588.
Y, en el caso de que se considere que intereses procesales y moratorios son cosas diferentes, si es o no compatible el pago de ambos y si ello se hace de manera sucesiva o simultánea. Este tema es muy discutido en la doctrina y existe diversidad de posturas en la Jurisprudencia, por lo que se van a agrupar las diferentes posturas existentes a fin de clarificar la exposición.

El Tribunal Supremo, en sus comienzos en la interpretación del artículo 921 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.881 (que es el antecedente del actual 576 vigente), identifica los intereses procesales con los moratorios. Porque aunque se refiera a ambos tipos de intereses, identifica la razón de ser de los mismos y, en algunos casos, su continuidad. A decir del alto tribunal, la finalidad de los intereses procesales, junto con la de los moratorios, es indemnizar la mora del deudor, de modo que el acreedor reciba una contraprestación por lo que tarda en cobrar, o, mejor, que sea indemnizado por los daños que le causa el retraso en el pago del deudor, así como el efecto de la devaluación de la moneda. En este sentido, como ejemplo, la Sentencia Tribunal Supremo 1ª de 19 de julio de 1996, que afirma del artículo 921 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que “una interpretación finalista permite afirmar que el precepto pretende aminorar los efectos del retraso en el pago efectivo…. finalidad que no se conseguiría si no se toma en cuenta la devaluación o pérdida de poder adquisitivo”. En interpretaciones posteriores, como se verá en el siguiente epígrafe, el Tribunal Supremo distinguirá ambos tipos de intereses, o, al menos, predicerá características o finalidades de los intereses procesales de las que carecen los moratorios. Es importante hacer notar que dicha interpretación coincide temporalmente con la aplicación estricta de la doctrina del *in illiquidis non fit mora*. Una posterior flexibilización de tal postura supondrá también un cambio en la interpretación de la finalidad del artículo 921 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Así, como ejemplo de esta primera interpretación, el Tribunal Supremo, en su en la Sentencia de 15 de julio de 1989 hace referencia a que el artículo 921 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, así como el 1.108 del Código Civil, vienen a corregir el fenómeno económico de la depreciación monetaria. En palabras del propio Tribunal: “En punto a la devaluación monetaria, que es un fenómeno producto del progreso y del estímulo productivo, no ha encontrado aún una normativa general que pueda ser aplicada y por ello se ha dicho tanto en la doctrina científica como en la jurisprudencial que, salvo los casos en que se ha regulado específicamente en determinadas materias.... en el ámbito civil, volvemos a repetir, en términos generales sólo ha encontrado su cauce por vía de la previsión contractual consensuada por medio de las denominadas cláusulas de estabilización; cláusulas

---


36 Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, ponente Malpica González Elipe, de 15 de julio de 1989, Sección Primera, Id Cendoj: 28079110011989100581, RJ Aranzadi 5620.
de valor u otras con el mismo propósito, pero que fuera de estas previsiones sólo es utilizable el artículo 1.108 del Código Civil con el refuerzo legal que con ánimo de enmendar demoras injustificadas en el pago de lo debido, ha venido parcialmente a llenar tal vacío en el artículo 921.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil …”.

El Tribunal constitucional ha identificado el fundamento de los intereses procesales y moratorios en cuanto a la idea de que ambos resarcen o indemnizan por la devaluación monetaria.

En auto de 13 de octubre de 1987, en la resolución de un recurso de amparo en el ámbito laboral, mientras el Tribunal dilucida la aplicabilidad o no del artículo 921 de la Ley de Enjuiciamiento Civil al ámbito laboral, hace un estudio de la finalidad de este artículo. En dicho estudio se equipara el fundamento o finalidad del mismo con el del artículo 1.108 del Código Civil.

Dice así el Tribunal Constitucional: “mientras que la consignación trata de asegurar o afianzar el posterior cumplimiento de la decisión judicial, el pago de intereses tendría como fin reparar el daño o perjuicio causado al acreedor por la no disposición de la cantidad objeto del crédito desde el momento en que se declaró judicialmente su derecho a percibirla.

De este modo, el artículo 921 de la Ley Enjuiciamiento Civil vendría a suplir la falta de rentabilidad de la cantidad devengada y aún no percibida, reparándose o amortiguándose así la pérdida de capacidad adquisitiva que experimenta la moneda con el paso del tiempo.

La finalidad del artículo 921 de la Ley de Enjuiciamiento Civil es resarcir los daños causados al acreedor por la tardanza en el cumplimiento de la obligación de pago, daños que experimenta el acreedor del empresario en igual medida que el acreedor de una deuda de naturaleza civil, puesto que la consignación supone únicamente que el empresario deja de tener en su poder la cantidad correspondiente, pero no implica en ningún caso que el acreedor pueda disfrutar de esa cantidad; razón por la cual el artículo 921 de la Ley de Enjuiciamiento Civil cumple aquí la misma función que en otros supuestos en los que el deudor no está obligado a consignar la cantidad objeto de la condena para interponer el recurso.”

La Sentencia del Tribunal Constitucional de 14 de septiembre de 1992, al determinar el pago de intereses del artículo 921 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, lo fundamenta de la siguiente forma: “aunque también puede contribuir a limitar la interposición de recursos sin posibilidades de éxito, posee esencialmente un cariz compensatorio o reparador del perjuicio causado al acreedor por la demora en el pago de una deuda, tratando de conservar su valor nominal consignado en la resolución judicial; es una consecuencia inherente al uso de la Administración de

Justicia que viene a compensar a la parte triunfante en el juicio de los daños que el planteamiento o la continuación del proceso le hubieran podido originar. Por tanto, la exigencia de abono de intereses no puede calificarse de una consecuencia irrazonable o desproporcionada realmente disuasoria del ejercicio del derecho al recurso.” Esta argumentación la repite en la Sentencia de 9 de mayo de 1994.

4.3. Diferenciación de las dos clases de intereses, moratorios y procesales.

Este epígrafe hará referencia a la distinta doctrina y Jurisprudencia que considera a los intereses moratorios y procesales como entes jurídicamente diferentes.

En primer lugar, es obligatorio hacer mención a la importante Sentencia del Tribunal Constitucional 167/85.

Los antecedentes de hecho de esta Sentencia, son, resumidamente, los siguientes: la compañía aseguradora demandante solicitó en el suplico de su demanda el abono de una cantidad más “las costas del procedimiento y los intereses del artículo 921 de la Ley de Enjuiciamiento Civil”.

La Sentencia del Juzgado de Distrito estimó parcialmente la demanda basando su parcial desestimación en la no procedencia de la concesión de los intereses por mora de los artículos 1108 y 1109 del Código Civil. – Nótese que el demandante solicita unos intereses y la Sentencia concede otros.- La parte demandante interpuso recurso de aclaración por este motivo, aclaración que le fue denegada. Contra dicha Sentencia formuló apelación, que se desestimó, y posteriormente amparo por incongruencia “que implica lesión del derecho a la tutela judicial”. El recurrente alega que en las sentencias de primera y segunda instancia existe incongruencia, puesto que se solicita una cosa y se resuelve otra diferente. El amparo es denegado.

Fundamenta esta denegación el Tribunal Constitucional en que se han concedido los intereses desde la firmeza de la Sentencia, que por lo tanto se le han concedido los intereses que solicitó (los del artículo 921 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) y que por lo tanto no existe incongruencia, sino confusión terminológica que no da lugar a la indefensión alegada ni vulneración alguna del derecho a la tutela judicial efectiva.

Continúa afirmando el Tribunal Constitucional en su fundamento de derecho único, in fine, aclarando lo que considera un equívoco del tribunal de instancia, hace referencia a “la confusión entre los intereses del artículo 921 Ley de Enjuiciamiento Civil con los intereses de demora”, que, según el Tribunal, ha estado en la base de

las decisiones de los tribunales inferiores. Diferencia entre los intereses procesales o del artículo 921 Ley de Enjuiciamiento Civil, que -habrían nacido incluso aunque el demandante no los hubiera pedido- y que nacen desde la Sentencia, y los intereses de la mora de los artículos 1.108 y 1.109 del Código Civil.

El Tribunal Supremo ha entendido desde antiguo que los intereses procesales nada tienen que ver con los moratorios. Así, ha dicho que “no son lo mismo los intereses moratorios propiamente dichos que contempla el artículo 1.108 del Código Civil y los intereses que recoge el artículo 921 LEC, que nacen ope legis”  

También se ha pronunciado el Tribunal Supremo que “no es posible olvidar que por el juego de las reglas contenidas en el artículo 921 de a Ley de Enjuiciamiento Civil, la condena al abono de una cantidad líquida, genera determinados intereses hasta el completo pago de la misma, que se determinaría en la fase de ejecución de sentencia, cuyos intereses nada tienen que ver con los que se hubieran convenido previamente entre las partes por vía contractual...”

Otro pronunciamiento del mismo tribunal en el mismo sentido: “El alegato confunde los intereses moratorios derivados del incumplimiento grave de las obligaciones asumidas en el contrato y como componentes de la indemnización de daños y perjuicios, procedentes conforme a los arts. 1.101 y 1.108 del Código Civil, con los intereses legales-procesales regulados en el precepto 921 de la Ley procesal civil. Ambos son propios intereses, pero de la naturaleza y operatividad distinta, ya que los intereses legales, al ser considerados como punitivos o sancionadores, nacen ope legis, sin necesidad de petición e incluso de expres condenda”  

En el mismo sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de marzo de 1992, que diferencia ambos tipos de intereses. En el caso que resuelve la Sentencia se solicita en la demanda al pago de una cantidad más los “intereses legales que correspondan”. Se condena en primera instancia al pago de dicha cantidad más el interés del 4% desde la demanda hasta la Sentencia y el 11,5% desde esta última. En apelación se desestima el recurso y se confirma la sentencia de primera instancia.

El Tribunal Supremo se estima el recurso de casación y se modifica la Sentencia de la Audiencia Provincial en el sentido de condenar únicamente al pago de los intereses desde la demanda hasta el pago. Lo argumenta así el Alto Tribunal: “debe ser estimado, pues si en la demanda se solicitó la condena al demandado al abono

43 Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, ponente Villagómez Rodil, de 18 de marzo de 1993, EDJ 1993/2726, RJ Aranzadi 1993/2400.
de los intereses legales, a ello debió ceñirse el juzgado de instancia, sin que le cupiese establecer diferenciaciones no solicitadas, acordando el abono del interés del 4% anual desde la fecha del emplazamiento hasta la sentencia y del 11,50 desde esta última hasta el pago, procediendo, en su consecuencia, la estimación..

También en la doctrina se ha entendido mayoritariamente que intereses procesales y moratorios son entes diferentes, aunque cada autor los diferencia haciendo hincapié en diferentes caracteres.

Diferencia Lorca Navarrete\textsuperscript{45} el interés moratorio del procesal, diciendo que este último tiene naturaleza legal, que no precisa su petición por la parte interesada para la concesión y devengo, produciéndose \textit{ope legis}. Son intereses ejecutorios, distintos a los moratorios de los artículos 1.100 y 1.108 del Código Civil.

Por su parte, Ferrer Gutiérrez\textsuperscript{46} entiende que los intereses de la mora procesal del artículo 576 no deben confundirse con los moratorios civiles, del Código Civil, dado que éstos se devengarán desde la interpelación judicial, requieren un especial pronunciamiento en la sentencia y su cuantía es la del interés legal del dinero si otra cosa no se ha pactado. Por contra, entiende este autor que los intereses de la mora procesal se devengan de manera automática desde que la sentencia determine la liquidez de la cantidad objeto de pago, se devengarán desde la sentencia y tendrán la cuantía del interés legal del dinero incrementado en dos puntos.

Ordás Alonso\textsuperscript{47} distingue intereses procesales y moratorios haciendo hincapié en los siguientes puntos:

- En cuanto a su finalidad, entiende Ordás que los intereses procesales tienden a incentivar la ejecución de sentencias, mientras que los intereses de demora tienden a indemnizar al acreedor por la falta de cumplimiento tempestivo del deudor de una obligación pecuniaria.

- En cuanto a su devengo, los intereses procesales nacen \textit{ope legis}, sin que la parte litigante deba solicitarlos. Sin embargo, para que se devenguen los intereses moratorios si es necesario que la parte acreedora los solicite. Tampoco el Juez debe hacer expresa referencia a ellos en la Sentencia, puesto que se derivan de la ley.

- En cuanto al momento de comienzo del devengo, en el caso de los intereses moratorios, es disponible por las partes\textsuperscript{48}, de manera que podrán pactar que comiencen a devengarse en el momento de constitución de la mora, en el momento anterior a la demanda, en el de la demanda o en cualquier otro similar. Sin embargo, si es necesario


\textsuperscript{47} Ordás Alonso, M.: \textit{El interés de demora}, op. cit., págs. 26 a 32.

que el deudor se haya constituido en mora, no es posible desde un momento anterior, dado que dicho pacto no se considera lívido por la doctrina. Los intereses procesales, en cambio, se devengran desde la **sentencia**.

- Los intereses procesales no pueden capitalizarse.

**Salinas Molina**\(^{49}\) entiende que el artículo 921 (precesente del actual 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) constituye una continuidad temporal del pago del interés legal **“sin que ello implique duplicidad”**. Según este autor lo que hace el artículo citado es incrementar en dos puntos el interés que se debe desde que el deudor incurre en mora y que abarca temporalmente desde la sentencia definitiva hasta que el total cumplimiento de la obligación.

Personalmente entiendo que los intereses procesales y los moratorios son entes completamente diferenciados. Así, tienen diferente naturaleza, cuantía, inicio y fin de devengo y se devengan en base a diferentes presupuestos. Y ello, principalmente, porque se regulan en diferentes leyes de diferente naturaleza (civiles o procesales).

Así, los intereses moratorios nacen de lo dispuesto en el Código Civil, en sede de obligaciones contractuales. Se regulan dentro del Libro IV de dicho cuerpo legal, que lleva por título **“de las obligaciones y contratos”**. Nacen, por tanto, los intereses moratorios en el seno de relaciones voluntarias de tipo obligacional entre ciudadanos que actúan en ejercicio de su libertad contractual y con libertad de pactos (autonomía de la voluntad).

Sin embargo, el interés procesal nace de una resolución judicial, en el seno de una relación procesal donde no existe igualdad de las partes. Por un lado está el Juzgado, que obliga y tiene la capacidad de sancionar y, por otro, el ciudadano, quien no puede sino acatar las decisiones judiciales. Este acatamiento podrá ser voluntario o, subsidiariamente, forzoso, mediante la ejecución forzosa de aquello no cumplido voluntariamente. Por otro lado, el ciudadano no tiene libertad de pactar con el Juzgado, sino que deberá relacionarse con él a través de los cauces y mecanismos predeterminados que no admiten autonomía de la voluntad ni pacto alguno (Derecho Procesal).

Es debido a esta diferente naturaleza del interés moratorio y procesal de donde nacen las diferencias en cuanto a su regulación y características\(^{50}\).

---


\(^{50}\) En contra, la Audiencia Provincial de Castellón, Auto Sección Primera de 14 de noviembre de 2007, ponente Pedro Luis Garrido Sancho. En su fundamento de derecho cuarto, afirma “Esta Sala no alcanza a ver la importancia de la distinción realizada por la Juzgadora de instancia sobre las clases de interés por su procedencia u origen.” (procesales o moratorios).
4.4. Compatibilidad de los intereses moratorios y procesales.

En este epígrafe se estudiará si el interés procesal es o no compatible con el interés moratorio. Y ello tiene una importantísima consecuencia económica, dado que si se consideran compatibles pueden generarse ambos a un tiempo, y si se consideran incompatibles se devengarán o los unos o los otros. Asimismo, en el caso de considerar que pueden devengarse ambos, habrá que determinar si su compatibilidad es simultánea o sucesiva en el tiempo.

Las posturas, doctrinales y jurisprudenciales, son las siguientes: en todos los casos, la doctrina y la jurisprudencia entienden que ambos tipos de intereses son incompatibles en el sentido de que no pueden devengarse al mismo tiempo. (Es importante destacar que se hace referencia a la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, no a las sentencias de todos los tribunales, dado que puede existir –y de hecho, ha existido- alguna resolución de tribunal inferior que falle contra la interpretación del Tribunal Supremo.)

En este sentido, afirma VEGAS TORRES: “la jurisprudencia ha venido entendiendo, acertadamente, que los intereses procesales y moratorios no son compatibles. El importe principal de la condena no puede devengar, simultáneamente, intereses moratorios e intereses procesales; o devenga los moratorios, o devenga los procesales, pero nunca los dos a la vez. Antes de la sentencia, los únicos intereses que pueden producirse son los moratorios, ya que los intereses de la mora procesal no se devengan hasta que se dicta la sentencia.”


53 La Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de noviembre de 2002, Sala de lo Civil, Ponente Antonio Gullón Ballesteros, número de sentencia 1030/2002, Id Cendoj: 28079110002002100158, RJ Aranzadi 2002/931, afirma que: “Los intereses del art. 921 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.881 requieren una determinación de la cuantía de la deuda por la sentencia y rigen en principio a partir de la misma; hasta entonces se aplica el...
La diversidad de posturas empieza después, en el momento temporal posterior a la Sentencia. Si se hubieran devengado intereses moratorios con anterioridad a la Sentencia, ¿qué tipo de intereses se devengarán con posterioridad a la misma, los mismos moratorios que ya se venían devengando o los procesales del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (antes artículo 921)? Para contestar a esta pregunta, podemos agrupar las posibles soluciones en las siguientes:

1. Tras la Sentencia se devengarán únicamente los intereses procesales.

2. Tras la Sentencia se devengarán únicamente los intereses moratorios, si así se hubiese pactado.

3. Tras la Sentencia se devengarán los que tengan la cuantía más alta, sean éstos los intereses moratorios o los procesales.

En cuanto a la doctrina científica, todos los autores consultados se han decantado por la primera postura o por la segunda.

Jurisprudencialmente se encuentran ejemplos de las tres posturas antecitadas.

Como ejemplo de la primera postura, entiende Ordás Alonso que únicamente pueden devengarse intereses procesales tras la Sentencia. Esta autora estudia el particular y sistematiza las diversas hipótesis de relación entre intereses moratorios y procesales en tres situaciones:

1. Reclamación de cantidad líquida y previa constitución en mora del deudor. En este caso, de estimarse la pretensión, la sentencia deberá condenar al pago del principal más intereses moratorios desde el momento de la constitución en mora del deudor y procesales desde la sentencia.

2. Reclamación de cantidad líquida sin precedente constitución del deudor en mora. La única diferencia con el supuesto anterior está en que aquí, de estimarse la acción afirmada, la condena al pago de intereses moratorios tendrá lugar desde la demanda-momento a partir del cual empieza la mora-. Los procesales, desde la primera sentencia de condena.

3. Reclamación de cantidad líquida. Indemnizaciones por daños y perjuicios. Tratándose de los casos en que la sentencia concretá por primera vez la cuantía –lo cual puede deberse a la iliquidez inicial del débito o a su naturaleza de “deuda de valor” (en especial, indemnización por daños y perjuicios), lo normal es que no se devenguen intereses moratorios, sino solo procesales desde la sentencia de instancia.
(y con independencia de las modificaciones que al alza o a la baja pueda introducir el Tribunal Superior).

Esta autora está de acuerdo con la tesis de la continuidad entre los intereses moratorios y procesales, de modo que éstos sustituyen a aquéllos desde la primera sentencia que condena al pago de una cantidad líquida. Es decir, defiende que “los intereses de demora no se acumulan al procesal.”

Como ejemplo de la segunda postura, se citará a VEGAS TORRES. Este autor afirma que tras la Sentencia se devengarán únicamente los intereses procesales, con una única excepción, y es que se haya pactado que se devengarán a un tiempo intereses moratorios y procesales.

En palabras del autor: “Ahora bien, partiendo de la incompatibilidad entre intereses moratorios e intereses procesales, el problema que se plantea después de la sentencia es el determinar qué clase de intereses se devengan desde que la sentencia se dicta hasta la completa ejecución del fallo. Caben, a este respecto, dos soluciones: 1) entender que la condena a intereses moratorios excluye la aplicación del artículo 576 que, por tanto, los intereses que devengará la sentencia, hasta su completa ejecución, son exclusivamente los moratorios y no los procesales. 2) entender que, desde la sentencia, los intereses que produce la condena son los procesales, que excluyen a los moratorios, lo que obliga a distinguir dos períodos: desde el momento de la constitución de la mora hasta la sentencia, en el que se devengarían intereses moratorios, y desde la sentencia hasta el cumplimiento total de la misma, en el que se producirían intereses procesales... es difícilmente sostenible la interpretación que se realiza en la Sentencia Tribunal Supremo Sala Primera de 22 de abril de 1982 que hace depender el interés aplicable después de la sentencia de cuál sea el más elevado...”. Y continúa este autor defendiendo que, si la ley ha utilizado el criterio de la existencia de interés fijado por ley especial, en segundo lugar el pactado y en tercer lugar el legal incrementado en dos puntos, únicamente podrán ser compatibles los intereses moratorios y procesales cuando exista pacto en este sentido.

En la Jurisprudencia, como se decía antes, encontramos ejemplos de las tres posturas antes citadas.

---

56 VEGAS TORRES, J. Comentarios a la Ley De Enjuiciamiento Civil, op. cit., pág. 994.
57 La Sentencia a que hace referencia el autor es la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 22 de abril de 1982, EDJ 1982/2380, RJ Aranzadi 1982/1961. En su fundamento de derecho segundo, in fine, establece que el aspecto de la compatibilidad entre intereses moratorios e intereses procesales debe resolverse de modo que los moratorios quedan embebidos en los superiores procesales a partir de la fecha de la resolución (sentencia), a excepción de que los intereses moratorios fueran superiores a los procesales, en cuyo caso prevalecerán los moratorios. Y termina la Sentencia, a modo de aclaración, diciendo “y en cualquier caso, el tipo más elevado”.

Como ejemplo de la primera postura (tras la Sentencia únicamente se devengan intereses procesales), podemos citar la Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de abril de 1994\textsuperscript{58}.

Es una sentencia con unos antecedentes cuanto menos curiosos, puesto que en sus fundamentos de hecho vemos que la Audiencia de Madrid rectificó un auto del Juzgado de instancia en que se había condenado al devengo de ambos intereses a un tiempo, moratorios y procesales. El Juzgado de instancia dictó un auto en el procedimiento de ejecución de sentencia en que condenó al pago de los intereses de demora desde la fecha en que la Sentencia de instancia adquirió firmeza y hasta que la cantidad fue consignada en el órgano judicial. Y condenó, asimismo, al pago de los intereses del artículo 921 de la Ley de Enjuiciamiento Civil desde la fecha de firmeza de la Sentencia. Contra este auto se interpuso recurso de aclaración, a lo que el Juzgado de instancia contestó que no había lugar a la misma y argumentó: que en los intereses de demora "no quedan subsumidos en modo alguno los intereses que por imperativo legal fija el artículo 921 de la Ley de Enjuiciamiento civil, que se devengan desde la fecha de la sentencia y que son concurrentes con los primeramente señalados".

Esta resolución no llegó a aplicarse, puesto que fue modificada en apelación. Y la Audiencia Provincial condenó al pago únicamente del interés procesal (del artículo 921 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) desde la fecha de la Sentencia de primera instancia. (Nótese que no desde la fecha de firmeza de la misma).

Se recurrió en casación la resolución de la Audiencia Provincial. El Tribunal Supremo declaró no haber lugar a la casación y argumentó:

"El motivo y el recurso no pueden ser estimados por las siguientes consideraciones: a) Adolece el razonamiento del recurrente de confusión entre los intereses de demora basados en el artículo 1108 del Código civil y los llamados punitivos a tenor del artículo 921 , párrafo 4, de la Ley de Enjuiciamiento civil. b) Mientras estos últimos no requieren instancia de parte, puesto que pueden imponerse con solo darse el supuesto de hecho que el legislador contempla, aquéllos (los moratorios) requieren instancia de parte... resulta que, como ya ha declarado esta Sala, hay que rechazar la compatibilidad de los intereses moratorios ordinarios con los regulados en el artículo 921 párrafo 4, de la Ley Procesal civil, pues se entiende que los moratorios quedan embebidos en los superiores del artículo úlitimamente citado a partir de la fecha de la resolución"

Siguiendo la segunda postura, es decir, que tras la sentencia se devengan únicamente los intereses moratorios, si así se hubiera pactado, hay otras Sentencias en que se acuerda que a partir de la Sentencia se continúan cobrando los intereses moratorios que se venían devengando antes de la resolución. En estos casos no se

\textsuperscript{58} Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de abril de 1994, Sala Civil, ponente: Santos Briz, número de Sentencia 304/94, número de recurso 1760/91. Id Cendoj: 28079110001994100252, RJ Aranzadi 1994/2937.
hace referencia a un cambio en la naturaleza jurídica de los intereses, únicamente a su cuantía. Estas Sentencias fundamentan el pago de intereses el pacto previsto en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (o su antecedente, el artículo 921 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

En este sentido, el Auto de la Audiencia Provincial de Madrid de 30 de septiembre de 200459. En este caso entiende el tribunal que procede el pago de los intereses de demora hasta el completo pago de la cantidad debida en el proceso de ejecución, porque así se había pactado en el contrato. Dice así la Audiencia Provincial: “debe indicarse que siendo los pactos de intereses de obligado cumplimiento para las partes (artículo 1091 del Código Civil60), es el resultante de los referidos pactos el que deben satisfacer los ejecutados, toda vez que el interés legal solo entra en juego en defecto de pacto (artículos 316 del Código de Comercio61 y 1108 del Código Civil62), debiéndose estar a lo convenido en los casos, como el presente en el que están establecidos los intereses de demora para el caso del incumplimiento, conforme al principio de libertad de pactos consagrado en el artículo 1255 del Código Civil63, por lo que tan citado pacto ha de considerarse válido y obligatorio para las partes, máxime cuando la recurrente no ha formulado demanda alguna acerca de la ilicitud de los intereses moratorios estipulados, pacto que no se ve afectado por la resolución del contrato, sino que continúa vigente y es de aplicación a la hora de reclamar la cantidad adeudada como consecuencia del incumplimiento de sus obligaciones por parte de los prestatarios, no siendo de aplicación los intereses procesales del artículo 576 de la Ley procesal.

Como ejemplo de la tercera y última postura (tras la sentencia se devengan, de intereses moratorios o procesales, los que tengan una cuantía mayor), es necesario citar la importante Sentencia de 22 de abril de 198264.


60 Artículo 1.091 del Código Civil: “Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos.”

61 Artículo 316 del Código de Comercio: “Los deudores que demoren el pago de sus deudas después de vencidas, deberán satisfacer desde el día siguiente al del vencimiento el interés pactado para este caso o, en su defecto, el legal. Si el préstamo consistiere en especies, para computar el crédito se graduará su valor por los precios que las mercaderías prestadas tengan en la plaza en que deba hacerse la devolución, el día siguiente al del vencimiento, o por el que determinen peritos, si la mercadería estuviere extinguida al tiempo de hacerse su evaluación si consistiere el préstamo en títulos o valores, el rédito por mora será el que los mismos valores o títulos devengaren, o, en su defecto, el legal, determinándose el precio de los valores por el que tengan en Bolsa, si fueren cotizables, o en la plaza, en otro caso, el día siguiente al del vencimiento”.

62 Artículo 1.108 del Código Civil: “Si la obligación consistiere en el pago de una cantidad de dinero, y el deudor incurriere en mora, la indemnización de daños y perjuicios, no habiendo pacto en contrario, consistirá en el pago de los intereses convenidos, y a falta de convenio, en el interés legal.”

63 Artículo 1.255 del Código Civil: “Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público”.

El supuesto de hecho de esta Sentencia es, resumidamente, el siguiente: se presenta demanda en reclamación de cantidad y posteriormente se formula reconvención. En la Sentencia de primera instancia se condena al demandado al pago de una cantidad sin hacer referencia a los intereses. Al demandante se le condena a concluir una obra. Se formula apelación en que no se modifica la Sentencia de instancia en lo que a nosotros nos interesa. Se interpone recurso de casación en que se alega, entre otros motivos, infracción de los artículos 1.100 y 1.108 del Código Civil. Alega en este sentido el recurrente que no existió pacto expreso en materia de intereses para el supuesto de intereses de demora y que por tanto es improcedente el pago de intereses.

La Sentencia del Tribunal Supremo hace una diferenciación entre los intereses moratorios y los derivados del artículo 921 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Dice así su fundamento de derecho segundo:

“1. si la cantidad objeto de la condena no producía intereses desde el momento anterior, con la fecha de la resolución se inicia el de los regulados por el artículo 921 bis y; 2. si, por el contrario, ya devengaba intereses moratorios, el aspecto de la compatibilidad entre intereses moratorios e intereses procesales debe resolverse de modo que los moratorios queden embebidos en los superiores procesales a partir de la fecha de la resolución (Sentencia), a excepción de que los intereses moratorios fueran superiores a los procesales, en cuyo caso prevalecerán los moratorios. Y termina la Sentencia, a modo de aclaración, diciendo -y en cualquier caso, el tipo más elevado-“.

Personalmente estoy de acuerdo con la primera postura, pues opino que tras la sentencia deberían devengarse únicamente los intereses procesales del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Tras la sentencia no cabe el devengo de otros intereses que no sean de naturaleza procesal. Y ello en base al mismo artículo 576. Así, dice el artículo 576 que la cuantía será la del interés legal del dinero más dos puntos o la que corresponda por pacto de las partes o por disposición especial de la ley. En mi opinión, las discrepancias se solucionan si seguimos el artículo al pie de la letra, puesto que el propio precepto habla de pacto de las partes. Es decir, si se hubiera pactado otra cuantía, se abonará ésta con preferencia al interés legal. Pero, ¿cuál deberá ser la naturaleza del pacto? Aquí está la solución a la controversia sobre la posibilidad de devengo de intereses moratorios tras la sentencia. Entiendo que deberá ser un pacto de carácter procesal, no un pacto de intereses de demora. Es decir, pactar la cuantía del interés para después de la sentencia. Al igual que se añaden a los contratos pactos de competencia jurisdiccional (de naturaleza procesal), se puede añadir el pacto de la cuantía del interés procesal. Entiendo el artículo de esta forma, es claro que tras la sentencia únicamente cabe el devengo de intereses procesales. Por ello, a mi entender, el pacto sólo será válido cuando se especifique la naturaleza del interés pactado como procesal y ello porque, como argumenté en el epígrafe 4.4, entiendo que interés procesal y moratorio son entes
diferenciados y cada uno tiene su propio período de devengo (antes de la sentencia los moratorios, después de aquélla los procesales).
5. Fundamento del interés procesal.

Los distintos autores fundamentan la existencia del interés procesal o bien como resarcitorio o bien como punitivo o sancionador.

Se habla del interés procesal como resarcitorio en el sentido de resarcir al acreedor o favorecido por la sentencia de la pérdida de poder adquisitivo ocurrida durante el tiempo en que deja de cobrar esa cantidad que le corresponde según la resolución judicial porque el deudor no la ha abonado. Es decir; una vez que la resolución judicial ha condenado al pago de una cantidad a una persona, ésta debe cobrarlo. Cualquier retraso en ese cobro debe indemnizársele con el pago de un interés de modo que no pierda poder adquisitivo.

En cuanto al fundamento punitivo o sancionador, se refiere a que se castiga al obligado al pago de una cantidad por resolución judicial que utiliza maniobras dilatorias para no realizar dicho pago. En este sentido, PADURA BALLESTEROS 65. Y ello aunque utilice maniobras “legales”, es decir; los recursos previstos en las leyes procesales. Los autores que se refieren a este fundamento hablan de una utilización “torticera” de dichos recursos.

Siguiendo el fundamento punitivo, entiende ÁNGEL FERNÁNDEZ66 que con los intereses del artículo 921 de la Ley de Enjuiciamiento Civil “pretendió el Legislator disuadir al condenado que pretenda sólo retrasar el pago efectivo de aquella cantidad líquida a que le condena la sentencia (sea mediante la interposición de recursos, sea a través de incidentes en la ejecución u otras maniobras dilatorias)”. Así, da a los intereses procesales un carácter “punitivo o disuasorio” de la interposición de recursos “temerarios”.

Haciendo una interpretación integradora de ambos fundamentos SALINAS MOLINA67, quien entiende que el interés procesal “tiene un fundamento indemnizatorio, tendiendo a resarcir al deudor por los daños y perjuicios derivados de la demora en el cumplimiento de la obligación del acreedor al pago de cantidades líquidas cuando ya exista una condena judicial a su abono. En los supuestos en que la obligación legal del pago de intereses pueda iniciarse, total o parcialmente, desde la fecha de la sentencia de instancia, coexiste aquél fundamento con una pretendida finalidad desmotivadora de la interposición de recursos. Mas tal concurrencia de finalidades solo se producirá si con tal actuación impugnatoria se impide efectivamente que el que tenga a su favor una resolución favorable recurrida pueda obtener la entrega, en todo o en parte, con cargo al condenado, de la cantidad reconocida a su favor, lo que actualmente será más frecuente dada la profunda

65 PADURA BALLESTEROS, M.: Los intereses procesales por demora... op.cit., pág. 54.
66 ÁNGEL FERNÁNDEZ, M., Derecho procesal civil, op.cit., pág. 198.
reforma operada sobre la ejecución provisional de sentencias de condena al pago de cantidades de dinero operada por la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000”.

En cuanto a la Jurisprudencia, el Tribunal Supremo ha puesto de manifiesto ambos fundamentos del interés procesal. Así, se ha referido a ellos como punitivos o sancionadores\(^68\) o también como método para paliar la devaluación monetaria\(^69\). El Tribunal Constitucional, en la misma línea, también lo ha considerado como disuasorio del recurso meramente dilatorio\(^70\).

Personalmente entiendo que los intereses procesales tienen un fundamento resarcitorio, como es paliar los efectos de la devaluación monetaria y otro punitivo, cual es castigar al que utiliza los recursos procesales únicamente para dilatar la actuación judicial. Sin embargo, no estoy totalmente de acuerdo con este fundamento punitivo o sancionador. Es es necesario tener en cuenta que, aunque los recursos no se utilicen únicamente para dilatar, los intereses procesales se abonan igual. El legislador, a la hora de configurar el “castigo” a los que utilizan el recurso como táctica meramente dilatoria, establece el castigo de la condena en costas\(^71\). Así, aunque al condenado al pago que recurre porque considera que le asiste la razón y no como táctica dilatoria, continuará abonando intereses si no consigue una modificación de la resolución original. Por lo tanto, creo que el fundamento resarcitorio del interés procesal se da siempre y el fundamento punitivo únicamente a veces.


\(^{69}\) En las sentencias siguientes: Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de julio de 1996, Sala de lo Civil, ponente Fernández- Cid de Temes, número de sentencia 597/96, número de recurso 1405/1992, Id Cendoj: 280791100019610425, RJ Aranzadi 5802, también en la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, ponente Malpica González Elipe, de 15 de julio de 1989, Sección Primera, Id Cendoj: 28079110011989100581, RJ Aranzadi 5620.


\(^{71}\) Artículos 394 y 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
6. Naturaleza jurídica: el carácter *ex lege* de los intereses procesales.

Como característica más intrínseca o sobresaliente de los intereses procesales se ha resaltado por Jurisprudencia y doctrina su llamado carácter *ex lege*. En este epígrafe se estudiará dicha característica. En una primera aproximación, se puede identificar el carácter *ex lege* con un automatismo en su uso, de modo que la aplicación de los intereses procesales es automática aunque no se solicite por la parte en la demanda ni se condene por el juez en la sentencia. Sin embargo, esta afirmación requerirá ser matizada, tema que centrará este epígrafe.

6.1. El carácter *ex lege* en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

La primera mención se hará a la importante Sentencia del TC 167/85, que supuso un punto y aparte en la consideración de los intereses procesales. A partir de esta Sentencia se establece una nueva doctrina sobre el carácter de aplicación de oficio de los intereses procesales y la necesidad de congruencia de las Sentencias. Ello se concreta en que no es necesario pedir dichos intereses en la demanda y que no es incongruente la Sentencia que no los menciona, puesto que en cualquier caso los está concediendo.

El supuesto de hecho de la citada Sentencia es el siguiente: En el año 1984 una compañía aseguradora demanda a un particular en reclamación de cantidad, solicitando que se condenara a éste a abonar "el principal más las costas del procedimiento y los intereses del artículo 921 de la Ley de Enjuiciamiento Civil".

La Sentencia del Juez de Distrito estima parcialmente la demanda, dado que no concede los intereses por mora de los artículos 1.108 y 1.109 del Código Civil puesto que no se habían solicitado por la demandante. Contra la Sentencia del Juez de Distrito se interpuso apelación, que desestimó el recurso y posterior recurso de amparo.

La Sentencia de apelación considera “superflua e intrascendente” la petición sobre los intereses del artículo 921 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por lo que la apelante alega indefensión al negársele la posibilidad de citar la norma para la satisfacción de sus intereses legítimos.

En el recurso de amparo, la recurrente alega que se ha lesionado su derecho a la tutela judicial efectiva al existir “asintonía” entre el petitum de su demanda y las sentencias del Juzgado de Distrito y la de apelación. Y dice que en ninguna de las sentencias se resolvió sobre “el concepto de los intereses del artículo 921 LEC”, resolviéndose en ambas negativamente su petición fundándola en la impertinencia de los intereses por mora de los artículos 1.108 y 1.109 del Código Civil. Es decir, alega incongruencia de la Sentencia.

---

72 Sentencia del Tribunal Constitucional 167/85, de 10 de diciembre de 85, EDJ 1985/141, RJC Aranzadi 1885/167.
El Tribunal Constitucional rechaza el amparo, por entender que la Sentencia de distrito no es incongruente, pero dedica los fundamentos de derecho a aclarar los conceptos de congruencia, interés procesal e interés por mora.

En lo que aquí nos interesa, el Tribunal Constitucional entiende que solicitar en la demanda declarativa la condena a los intereses del artículo 921 es “superfluo e intrascendente” porque dichos intereses nacen por ministerio de la ley, no por solicitud de la parte. Así, dice el Alto Tribunal que “En su demanda pidió la condena a <los intereses del artículo 921 Ley de Enjuiciamiento Civil>. Tal pedimento era, como se le califica en la sentencia de apelación, "superfluo e intrascendente", porque naciendo esos intereses no de una sentencia declarativa, sino por imperativo de la ley (párrafo 4º del artículo citado) y siendo obligatorio el conocimiento de la ley por parte de los órganos insertos en el poder judicial (que eso y no otra cosa significa el brocardo "iura novit curia"), ni hace falta pedir lo que la ley manda, ni comete incongruencia el Juez que silencia un "petitum" de tal naturaleza. Dicho de otro modo más concreto: los intereses del artículo 921 Ley de Enjuiciamiento Civil nacen en este caso desde que el propio Juez de la instancia condenó al pago de la cantidad líquida de 14.862 pts., y habrían nacido incluso aunque el demandante no los hubiera pedido, y podrá exigirlos, en caso de impago inmediato de la condena principal, a partir de la fecha de la sentencia de instancia, pues la consecuencia que la norma legal (artículo 921.4 Ley de Enjuiciamiento Civil) anuda a la condena a cantidad líquida, esto es, el nacimiento en favor del acreedor de un interés anual igual al interés legal incrementado en dos puntos, no necesita ser objeto de un pedimento de la demanda.”

Otra Sentencia del Tribunal Constitucional del año 2001 estudia la relación entre la inmodificabilidad de las resoluciones judiciales y la expresa condena a los intereses del artículo 921 de la Ley de Enjuiciamiento Civil fue estudiada en la Sentencia Tribunal Constitucional 140/200173, que determina que “la condena al pago de una cantidad líquida... lleva aparejado el pago del interés legal
incrementado en dos puntos, lo que, incluso... implica la innecesariedad de dicho pronunciamiento”. Y tal declaración viene dada porque la Sentencia de la Audiencia Provincial recurrida condena a “seguir adelante la ejecución por las sumas solicitadas”, entendiendo el Tribunal Constitucional que la expresión “sumas solicitadas” debe incluir necesariamente los intereses procesales cuando se trate de condena al pago de una cantidad líquida.

6.2. El proceso declarativo y el carácter ex lege.

Aquí se tratará de contestar a varias cuestiones relacionadas con el significado del carácter ex lege de los intereses procesales y su aplicación concreta en el proceso declarativo. Así, ¿será necesario solicitar en la demanda la condena a intereses procesales o se entenderá que viene dado por el principio del iura novit curia?. Por otro lado, ¿será necesario condenar expresamente al pago del interés procesal en la sentencia o se sobreentiende tal pronunciamiento?.

El Tribunal Supremo ha insistido en el carácter ex lege de los intereses procesales y que en su aplicación no rige el principio dispositivo, al contrario del caso del interés moratorio, que debe solicitarse. Así, por ejemplo la Sentencia de 5 de noviembre de 199947, que ha dicho “al condenar al pago del -interés legal correspondiente- se está refiriendo tan solo al interés ejecutorio que establece el artículo 921 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que se acuerda y aplica en todo caso, aun sin petición de parte y aun sin resolución expresa de la sentencia, cuya naturaleza...es de interés punitivo”.

Esto ha llevado a que el Tribunal Supremo también deba estudiar la relación entre la condena al interés procesal sin que éste se haya solicitado y la necesidad de congruencia de las sentencias. Esta necesidad de congruencia nace de la exigencia del artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, que establece que las Sentencias deberán ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. Y continúa diciendo el artículo que “harán las declaraciones que aquéllas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos que hayan sido objeto del debate.”.

Dicho carácter ex lege (tal y como ha sido considerado por Tribunal Constitucional y Supremo) tiene, procesalmente, varias consecuencias:

- Primero.- No es necesario formular en el petitum de la demanda la solicitud de intereses procesales.

---

• Segundo.- No es necesario que el Juez condene en la sentencia al pago de los intereses procesales para que éstos deban abonarse.\textsuperscript{75}
• Tercero.- En el caso de que en la sentencia no se haga mención alguna a los intereses procesales, se considerará un error material, subsanable de oficio y en cualquier momento, en virtud del artículo 214 de la Ley de Enjuiciamiento Civil \textsuperscript{76}, sin tener que acudir al recurso a la sentencia.
• Cuarto.- Tampoco es necesario hacer mención en la demanda ejecutiva al petitum de los intereses procesales, que se incluirán en el Auto que despacha la ejecución aunque no se hayan solicitado \textsuperscript{77}.

En cuanto a la falta de mención a los intereses procesales en la Sentencia, la tónica general en las Sentencias del Tribunal Supremo es, como se ha expuesto, no entender que el no pronunciamiento es falta de congruencia. Sin embargo, hay alguna Sentencia que se pronuncia en contra, como la Sentencia Tribunal Supremo, de 30 de noviembre de 1995 \textsuperscript{78}. El supuesto de hecho que se resuelve es el siguiente: en el Juzgado de Primera Instancia se dictó Sentencia en que “estimando sustancialmente la demanda...condeno a que abonen a la demandante como indemnización de daños y perjuicios la cantidad que en ejecución de Sentencia se

\textsuperscript{75} Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de julio de 1996, Sala de lo Civil, número de Sentencia 624/1996, número de recurso 3426/1992, Ponente Fernández-Cid de Temes, Id Cendoj: 28079110001996100395, RJ Aranzadi 1996/5898. El supuesto de hecho de la Sentencia es, en resumen, el siguiente: en primera instancia se desestimó la demanda. En segunda instancia se revocó la Sentencia de instancia y se condenó al demandado a abonar una cantidad, sin hacer mención alguna al pago de intereses. Se presentó recurso de casación y el Tribunal Supremo, en lo relativo a la omisión a la condena a intereses, falló: “Esta Sala tiene establecido que aquellos errores u omisiones que pueden subsanarse en aclaración de sentencia y aún en ejecución de la misma, no propician secuencia casacional; más la omisión puesta de manifiesto reviste tal trascendencia que, en evitación de nuevos conflictos y para que el fallo tenga la virtud y eficacia suficientes para dejar resueltos todos los puntos que fueron materia de debate, el motivo debe ser acogido en sus estrictos términos, aclarándose por la misma razón, recobrada la facultad para actuar como Sala de instancia y dado que los intereses del artículo 921 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se producen \textit{ope legis}, según tiene establecido la jurisprudencia, que los de las sumas que nos ocupan se entiendan devengados desde la fecha de la sentencia de la Audiencia”. En el fallo, casan la Sentencia de apelación y “la anulamos en el único sentido de añadirse a su fallo que... (la demandada) debe indemnizar... en la cantidad de 3 millones de pesetas, y devengando las sumas establecidas los intereses del artículo 921 de la LEC desde la fecha de la sentencia de la Audiencia.”

\textsuperscript{76} Artículo 214 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. “Invariabilidad de las resoluciones. Aclaración y corrección. 1. Los tribunales no podrán variar las resoluciones que pronuncien después de firmadas, pero si aclarar algún concepto oscuro y rectificar cualquier error material de que adoleczan. 2. Las aclaraciones a que se refiere el apartado anterior podrán hacerse de oficio dentro de los dos días hábiles siguientes al de la publicación de la resolución, o a petición de parte o del Ministerio Fiscal formulada dentro del mismo plazo, siendo en este caso resuelta por el tribunal dentro de los tres días siguientes al de la presentación del escrito en que se solicite la aclaración. 3. Los errores materiales manifestos y los aritméticos en que incurran las resoluciones judiciales podrán ser rectificados en cualquier momento.”

\textsuperscript{77} En contra, \textit{Padura Ballesteros, M.: Los intereses procesales por demora... op.cit, pág 85.}

\textsuperscript{78} Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, 1044/95, de 30 de noviembre de 1995, EDJ 1995/6371, recurso 1402/92, RJ 1995/8900.
Es interesante estudiar el fundamento de derecho primero de esta Sentencia, puesto que en él hace una referencia al criterio general para, posteriormente, optar por el criterio contrario.

Dice así: “La sociedad recurrente que ostenta condición de parte actora en el pleito, plantea vicio de incongruencia en la Sentencia que combate y en base a que en la misma la Sala sentenciadora no decidió dos cuestiones, que integraban el suplico de la demanda...(una de ellas era) no contener la Sentencia de apelación pronunciamiento respecto a los intereses legales, también pedidos expresamente en la demanda, la Sentencia del Juzgado no los refirió ni declaró, habiendo dicho reiteradamente esta Sala de Casación Civil que no ocasiona incongruencia “intra petita”, cuando los intereses legales-procesales del artículo 921-4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil son silenciados en la Sentencia, ya que su abono surge no de Sentencia declarativa, sino más bien en forma automática, “ope legis”, desde que se concreta en la decisión la cuantía líquida debitada para conformar fallo condenatorio de su obligado pago...debiendo de entenderse como fecha de devengo de los referidos intereses, la correspondiente a la de la Sentencia de apelación, en cuanto hace cierta la cantidad indemnizatoria que otorga..No obstante lo expuesto se nos impone la necesaria concreción del fallo a dictar en esta vía casacional, con acogida del motivo...con lo cual se ha de casar la Sentencia recurrida, por la necesidad de cumplimentar el fallo condenatorio con la integración del abono de los intereses de referencia y fijación de la fecha de su devengo en relación a la suma definitivamente concretada en la segunda instancia y hasta su cumplido pago”. Es decir; el Tribunal Supremo, pese a recordar su doctrina, no condena a intereses desde la primera instancia sino desde la segunda, lo que supone desviarse de su doctrina habitual.

En cuanto a la congruencia, el Tribunal Supremo ha defendido que “la imposición de los intereses que proceda, en modo alguno supone la resolución de...

---

79 Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 12 de mayo de 1992, Ponente Albácar López, EDJ 1992/4644, RJ 1992/3919. En este caso se presenta demanda de ejecución de laudo arbitral en que se condena a una mercantil al pago de una cantidad más unos intereses determinados, previstos en el laudo. Se dicta un auto en ejecución del laudo en que se decreta el embargo suficiente para pagar la cantidad prevista como principal y los intereses en el propio laudo, así como otra cantidad para el pago de los intereses procesales del artículo 921 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, aunque el solicitante en ejecución no lo había pedido.
un punto sustancial no controvertido en el pleito, cuando, aunque la ejecutoria no haga alusión a intereses, los impone el apartado 4 del artículo 921 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.”

Conforme a esta doctrina falla el Tribunal Supremo en un caso del año 1996.\(^{80}\) En este caso, los intereses no se solicitan en la demanda y no se condena a su pago en la sentencia de primera instancia ni en la de apelación. Sin embargo, al fallar en casación se condena al pago de intereses procesales desde la fecha de la sentencia de primera instancia pero devengados respecto del principal con la cantidad fijada en la sentencia de apelación. Dice así el Alto Tribunal: “Efectivamente para que sea aplicable “in genere” el artículo 921 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, es preciso que exista una sentencia que condene el pago de cantidad determinada y líquida, como ocurre en el presente caso, y a partir de ese momento surgirá la obligación “ope legis” de abonar los intereses legales especificados en tal precepto, lo que significa que no será preciso su rogación y que producirá sus efectos a partir de la sentencia de primera instancia. Como en la sentencia de instancia y apelación no se habla para nada de la aplicación de los intereses legales, será procedente, en el presente caso, casar la sentencia en el sentido de complementar la condena con el pronunciamiento declarativo del deber de satisfacer el interés legal más dos puntos desde la primera instancia y por la suma fijada en la segunda instancia. Y aunque haya habido alguna sentencia de esta Sala, en concreto la de 25 de febrero de 1992, que proclamaba que no comete incongruencia el Juez que silencia un "petitum" como el del artículo 921-4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, dado el carácter punitivo o condenatorio del mismo y su signo ope legis, sin embargo el alejamiento de todo sobreentendido legal, que a veces puede resultar desconocido para el ciudadano, es lo que lleva a este recurso, a estimar el actual motivo como base a inaplicación de lo preceptuado en el mencionado artículo 921-4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.”

Esta cuestión de la si es o no necesaria la condena expresa a los intereses procesales en la Sentencia también ha sido estudiada por la doctrina. En este epígrafe explicaré las distintas posiciones doctrinales cerca de dicha problemática.

Aunque antes se va a centrar el objeto del estudio aclarando que, según la regulación vigente, pueden diferenciarse dos supuestos de pronunciamiento en el Tribunal que resuelve el recurso, según el artículo 576.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, “En los casos de revocación parcial, el tribunal resolverá sobre los intereses de demora procesal conforme a su prudente arbitrio, razonándolo al efecto.” El caso en que exista confirmación de la Sentencia de instancia o revocación total y el caso en que exista revocación parcial. Porque en el primer caso, podemos entrar a discutir si se aplica el carácter ex lege de los intereses procesales, pero, en el segundo (revocación parcial), es necesario que el Tribunal ad quem se pronuncie.

---

\(^{80}\) Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, número 798/1996, de 10 de octubre de 1996, ponente Sierra Gil de la Cuesta, EDJ 1996/7000, RJ 1996/7554.
Tal y como se expondrá después, la doctrina mayoritaria ha entendido que el carácter *ex lege* de los intereses procesales supone la no necesidad de solicitud en la demanda ni de expresa condena en la sentencia.

El carácter de obligación legal del pago de los intereses procesales ha sido sostenido, entre otros, por Salinas Molina⁸¹, quien afirma que “a diferencia de lo que cabe entender acontece con respecto a los intereses de los arts. 1108 y 1109 Código Civil (...) que han de ser pedidos oportunamente en el proceso declarativo y han de ser fijados en la sentencia condenatoria-, en el artículo 576 Ley de Enjuiciamiento Civil se establece una obligación legal del pago de intereses, por lo que de dicha naturaleza deriva la innecesariedad tanto de que el presunto acreedor deba solicitarlos expresamente ni en el proceso declarativo ni en el de ejecución como la de que exista una condena declarativa expresa a su abono”. Continúa el autor explicando que no es necesario que se refleje en la Sentencia la condena a su pago, ya que la necesidad de su expresa condena y fundamentación nace únicamente en el caso de que exista revocación parcial de una Sentencia en el Tribunal superior, en virtud del artículo 576.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Tal es la naturaleza de obligación legal la imposición del pago del interés procesal que afirma Salinas Molina que es una norma imperativa que no puede ser excluida en perjuicio del beneficiado por ella, en virtud del artículo 1255 del Código Civil.

En cuanto al carácter *ex lege* de los intereses procesales y la necesidad de congruencia de la Sentencia, Padura Ballesteros⁸² diferencia entre lo que supone el no pronunciamiento en los casos en que no se ha solicitado en el petitum y los casos en que sí se han solicitado los intereses procesales en la demanda. Y ello porque entiende la autora que no mencionar la condena al interés procesal en el caso de haberse solicitado se puede sobreentender por su naturaleza *ex lege*, pero no se puede añadir a la Sentencia si en la demanda no se había solicitado. Manifiesta la autora su discrepancia con el Tribunal Constitucional cuando éste reprocha la petición de intereses procesales a la parte. Y ello porque el principio *iura novit curia* no puede suponer que la parte en su demanda no ponga la fundamentación jurídica por el hecho de que el Juez deba de conocerla, al igual que se solicita la condena en costas por más que ésta se imponga por la Ley al que pierde sus pedimentos.

Asimismo, Padura Ballesteros⁸³, afirma que el artículo 921 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.881 (antecedente del 576) tiene naturaleza sancionatoria o punitiva, y ello porque se sanciona al deudor que ha incumplido y ha llegado a la fase de ejecución con el pago de dos puntos más de interés más que el deudor que paga la Sentencia voluntariamente. Por eso, afirma esta autora se preconiza de los intereses procesales la aplicación *ex officio*.

---

⁸³ Padura Ballesteros, M.: *Los intereses procesales por demora...*, op.cit., pág. 81 y 91
Por su parte, entiende ÁNGEL FERNÁNDEZ\textsuperscript{84} que los intereses procesales nacen \textit{ex lege}, sin necesidad de que la parte lo haya pedido previamente y sin necesidad de que a ellos condene la sentencia y sin necesidad de que la sentencia sea firme.

Es necesario hacer referencia a cuáles son los requisitos que debe tener la demanda declarativa para poder dictar Sentencia que condene a pagar intereses procesales. Es decir; ¿debe constar como pedimento en la demanda la condena específica al pago de intereses procesales o no es necesario?

Para ver cuál es la doctrina mayoritaria del Tribunal Supremo sobre el particular, se hará referencia a la Sentencia número 798/1996\textsuperscript{85}. En este caso, los intereses no se solicitan en la demanda y no se condena a su pago en la sentencia de primera instancia ni en la de apelación. Sin embargo, al fallar en casación se condena al pago de intereses procesales desde la fecha de la sentencia de primera instancia pero con la cantidad fijada en la sentencia de apelación.

Por último, es interesante determinar si es considerada necesaria la firmeza de la Sentencia que se ejecuta para devengar intereses. En este sentido, ha declarado el Tribunal Supremo\textsuperscript{86} que “el devengo de intereses se produce por el solo hecho de emitirse sentencia con contenido indemnizatorio pecuniario perfectamente precisado, sin que concurra el presupuesto necesario de que la resolución tenga que ser firme, pues la norma no lo exige y esta Sala lo ha tenido ocasión de declarar”.

En mi opinión, se debe integrar el carácter \textit{ex lege} de los intereses procesales con la prohibición de indefensión prevista en el artículo 24 de la Constitución\textsuperscript{87} y el carácter dispositivo de las normas procesales civiles. Y ello porque causa una evidente indefensión al condenado por una sentencia que no hace mención a intereses procesales que éstos se ejecuten en un procedimiento posterior. Sobre todo si en la demanda no se solicitaron y tampoco se hizo referencia a los mismos. Desde mi punto de vista, en este caso el condenado no puede razonablemente conocer ni esperar que su condena aumente en los citados intereses. Entiendo que deberá primar la prohibición de indefensión al carácter \textit{ex lege} de los intereses procesales. El carácter \textit{ex lege} de los intereses procesales para mí significa, simplemente, que el que ha ganado el pleito tiene derecho a solicitar su cobro, no que puedan cobrarse aún sin petición del solicitante y sin condena en la Sentencia.

\begin{flushleft}
\textsuperscript{84} ÁNGEL FERNÁNDEZ, M., \textit{Derecho procesal civil.}, op.cit. pág 198.
\textsuperscript{86} Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 5 de abril de 1993, número 326/1993, Ponente Villagómez Rodil, EDJ 1993/3367, RJ 1993/2787.
\textsuperscript{87} Artículo 24 de la Constitución Española: “1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión. 2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la Ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia….”.
\end{flushleft}
6.3. El proceso de ejecución y el carácter *ex lege* de los intereses procesales.

En el proceso de ejecución, debemos plantearnos si el carácter *ex lege* de los intereses procesales significa que no será necesario hacer expresa mención a ellos (en la demanda de ejecución, en el auto que despacha la misma...) porque se entiende que nacen por ministerio de la ley, o, por el contrario, entenderemos que la falta de expresa mención supone renuncia a los mismos y la imposibilidad de obtenerlos en solicitud posterior en el mismo u otro procedimiento.

*Padura Ballesteros* 88 entiende que “la aplicación *ex lege* del interés procesal se refiere al proceso de declaración, no al de ejecución....a nadie se le puede forzar a que coja con la mano el dinero que le pertenece. Uno siempre es libre de pedir la ejecución de unos pronunciamientos y no de otros.... No cabe renuncia expresa al interés procesal, pero una cosa es la irrenunciabilidad y otra la disponibilidad de *cara a su cobro*.” Esta autora continúa exponiendo otro supuesto diferente, cual es que no se incluyen los intereses procesales en el petirum de la demanda ejecutiva. Entiende que no hay obstáculo para que posteriormente solicite una ampliación de la demanda ejecutiva, o una nueva demanda ejecutiva pero referida únicamente a los intereses y acumular ambos procesos. Asimismo entiende que el principio de justicia rogada que rige también en la ejecución le permitiría ejecutar únicamente una parte del título y posteriormente la otra y solicitar acumulación de ambas.

En mi opinión, no puede darse una respuesta única que sirva para todos los procesos ejecutivos. Para centrar el tema, habría que distinguir los supuestos en que se ejecuta una resolución judicial dictada por el mismo Juzgado o Tribunal que sea competente para ejecutarla o bien que sea ejecutada por otro distinto.

En el primer supuesto, es decir, cuando se ejecute la resolución ante el mismo Tribunal que la dictó, el artículo 549.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que regula la demanda ejecutiva, establece que “Cuando el título ejecutivo sea una sentencia o resolución dictada por el tribunal competente para conocer de la ejecución, la demanda ejecutiva podrá limitarse a la solicitud de que se despache la ejecución, identificando la sentencia o resolución cuya ejecución se pretende.” Por lo tanto, aunque el ejecutante no solicite el pago de los intereses procesales, (o incluso no solicite ninguna actividad ejecutiva en absoluto), el Juzgado despachará la ejecución por los mismos y el pago de las costas (presuponiendo la condena en la sentencia).

Sin embargo, en el segundo supuesto, (ejecución no derivada de resolución no judicial ni arbitral o que no se trate de resolución judicial dictada por el mismo Tribunal que la deba ejecutar) se puede plantear si la no solicitud de intereses en la demanda ejecutiva supone una renuncia a los mismos o, como sostiene *Padura Ballesteros*, M.: *Los intereses procesales por demora...,* op.cit, pags. 95 y 98 a 101.

88 *Padura Ballesteros*, M.: *Los intereses procesales por demora...,* op.cit, pags. 95 y 98 a 101.
BALLESTEROS, puede incoarse demanda solo por una parte del título y posteriormente por la otra.

Respecto a la última posibilidad planteada por la autora (ser posible iniciar una demanda ejecutiva solicitando únicamente el principal y posteriormente iniciar otra por los intereses o por parte de ellos y acumular una a la otra), en mi opinión la respuesta ha de ser negativa, en base a dos clases de razones: procesales (de preclusión y de economía procesal) y materiales (de evitar abusos en base al principio de los actos propios y al ejercicio de los derechos conforme a la buena fe).

En mi opinión, el carácter ex lege del interés procesal supone que el ejecutante tiene derecho a cobrarlo si no efectúa una renuncia expresa. El problema puede plantearse cuando la parte ejecutante no efectúa renuncia expresa pero tampoco solicitud de tasación de intereses, incluso siendo requerido para ello por el Juzgado. En este caso, ¿podría entenderse que ha renunciado a los mismos?

Según el artículo 570 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que “La ejecución forzosa sólo terminará con la completa satisfacción del acreedor ejecutante.” Por ello se plantea que las ejecuciones, en la regulación procesal dada por la Ley 1/2000, no caducan, al contrario de lo que ocurriría en la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil. Entiendo que esta parca regulación de la Ley deja sin solucionar el problema planteado. En la práctica, se utilizan dos mecanismos cuando el ejecutante no presenta escrito solicitando la liquidación de intereses y tampoco renuncia a ellos expresamente. El primer mecanismo es darle traslado con apercibimiento de tenerle por renunciado a los mismos, lo cual se hace mucho en la práctica pero es jurídicamente dudoso. Y ello porque dicho requerimiento no tiene base directa en ningún artículo de la ejecución, sino que se utiliza el argumento de la necesidad de dotar al procedimiento de impulso procesal\textsuperscript{89}. El segundo es enviar el procedimiento al archivo con una resolución de archivo provisional. Queda plantearse en este punto qué ocurre si el ejecutante insta la liquidación de intereses mucho tiempo después. Personalmente opino que, si transcurrido un gran lapso de tiempo, se solicitara la liquidación de intereses, se debería limitar el plazo del cómputo de los mismos a aquellos periodos en que la ejecución estuvo activa (excluyendo el período archivado o inactivo por falta de solicitud de la parte), en base a la teoría del abuso del derecho y la necesidad de ejercitar los derechos conforme a las exigencias de la buena fe\textsuperscript{90}. Y se debería obrar del mismo modo cuando el ejecutante no presente la demanda ejecutiva hasta muchos años después (generalmente cuando va a caducar la acción para su ejercicio).

\textsuperscript{89} Establece el artículo 179.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que “Salvo que la Ley disponga otra cosa, el órgano jurisdiccional dará de oficio al proceso el curso que corresponda, dictando al efecto las resoluciones necesarias.”

\textsuperscript{90} Art. 7 Código Civil. “Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe. La ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio ant social del mismo. Todo acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso.”
Así lo ha entendido el Tribunal Supremo en su Sentencia de 21 de mayo de 1982\textsuperscript{91}. Resuelve el Alto Tribunal un supuesto en que existían deudas recíprocas por parte de demandante y demandado, y “la actuación del demandado reclamando honorarios profesionales a los que ya había renunciado en un principio, estaban prescritos cuando los reclama e incluso satisfechos con las condenaciones que le había hecho el actor”, había llevado a pensar que dichas cantidades debidas ya no serían reclamadas.

En los fundamentos de derecho, se declara que se falta al principio de la buena fe cuando se va “contra la resultancia de los actos propios, se realiza un acto equivoco para beneficiarse intencionadamente de su dudosa significación o se crea una apariencia jurídica para contradecirla después en perjuicio de quien puso su confianza en ella”. Continúa el Tribunal Supremo afirmando que actúa contra la buena fe el que ejercita un derecho en contradicción con su anterior conducta en la que hizo confiar a otro (prohibición de ir contra los actos propios) y especialmente infringe el mismo principio el que ejercita su derecho tan tardíamente que la otra parte pudo efectivamente pensar que no iba a actuarlo (retraso desleal), vulnerando, tanto la contradicción con los actos propios, como el retraso desleal, las normas éticas que deben informar el ejercicio del derecho, con la consiguiente posibilidad de impugnarlo por antijurídico al amparo de la preceptiva contenida en el Artículo 7 del Código Civil, número 1.

6.3.1. La demanda ejecutiva.

En relación con el carácter ex lege de los intereses procesales, se plantea si es necesario o no solicitar la condena a intereses procesales en la demanda ejecutiva o se sobreentiende hecho dicho pedimento.

En cuanto a los requisitos entiende \textsc{Montero Aroca}\textsuperscript{92} que la demanda ejecutiva debe hacer dos menciones distintas en cuanto a los intereses:

“1. Los intereses ya vencidos en el momento de presentar la demanda, que deben determinarse de modo líquido, puesto que los mismos son el resultado de una operación matemática, y ello tanto se trate de los intereses ordinarios (o remuneratorios), como de los moratorios.

2. Los intereses que van a ir venciendo durante el curso del proceso de ejecución, que evidentemente no pueden ser cantidad líquida, pues se desconoce el tiempo sobre el que deben calcularse. Para estos intereses el ejecutante debe pedir en

\textsuperscript{91} Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 1982, Sala de lo Civil, ponente Sánchez Jáuregui, RJ Aranzadi 1982/2588.

\textsuperscript{92} \textsc{Montero Aroca, J.} y otros: \textit{El nuevo proceso civil}, Tirant lo Blanch, Valencia, 2001, pág 740.
la demanda la cantidad que calcule (arts. 572.1\textsuperscript{93} y 575.1\textsuperscript{94} de la Ley de Enjuiciamiento Civil), sin perjuicio de su liquidación al final del proceso.

MORENO CATENA\textsuperscript{95}, al enumerar los requisitos que debe contener la demanda ejecutiva hace referencia, entre otros, a “la tutela ejecutiva que se pretende, fijando en su caso la cantidad total que se reclame, como principal, intereses y costas”.

Sin embargo, ORTELLS RAMOS\textsuperscript{96} no enumera la solicitud de condena de intereses en los requisitos de la demanda ejecutiva. Alude a la necesidad de que se reclame una cantidad de dinero líquida, es decir “cuantitativamente determinada”.

En cuanto al momento de presentación de la demanda ejecutiva, y refiriéndome en concreto al plazo de caducidad, entiende SALINAS MOLINA\textsuperscript{97} que la obligación del pago de los intereses procesales que nace del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil es diferente a la del pago del principal y la ejecutoria constituye un nuevo título, con efectos propios y con acción personal para exigirla, que es diferente del derecho al pago del principal que se ejercitó en el proceso declarativo, por lo que tiene el plazo de caducidad de cinco años del artículo 518 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

6.3.2. El auto que despacha la ejecución

El artículo 551 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que, presentada demanda ejecutiva, el Tribunal despachará en todo caso la ejecución mediante auto.

\textsuperscript{93} El artículo 572.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, relativo a la “Ejecución por saldo de operaciones”, dice así: “Para el despacho de la ejecución se considerará liquida toda cantidad de dinero determinada, que se exprese en el título con letras, cifras o guarismos comprensibles. En caso de disconformidad entre distintas expresiones de cantidad, prevalecerá la que conste con letras. No será preciso, sin embargo, al efecto de despachar ejecución, que sea liquida la cantidad que el ejecutante solicite por los intereses que pudieran devengar durante la ejecución y por las costas que ésta origine.”

\textsuperscript{94} El artículo 575.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, relativo a la “Determinación de la cantidad y despacho de la ejecución”, dice así: “I. La ejecución se despachará por la cantidad que se reclame en la demanda ejecutiva en concepto de principal e intereses ordinarios y moratorios vencidos, incrementada por la que se prevea para hacer frente a los intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y a las costas de ésta. La cantidad prevista para estos dos conceptos, que se fijará provisionalmente, no podrá superar el 30 % de la que se reclame en la demanda ejecutiva, sin perjuicio de la posterior liquidación. Excepcionalmente, si el ejecutante justifica que, atendiendo a la previsible duración de la ejecución y al tipo de interés aplicable, los intereses que puedan devengarse durante la ejecución más las costas de ésta superaran el límite fijado en el párrafo anterior, la cantidad que provisionalmente se fije para dichos conceptos podrá exceder del límite indicado.”.

\textsuperscript{95} CORTÉS DOMINGUEZ, V. y MORENO CATENA, V., (coordinadores): La Nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, Tecnos, Madrid, 2000, Tomo IV, pág 79.

\textsuperscript{96} ORTELLS RAMOS, M.: Derecho procesal civil, 7ª Edición, Thomson Aranzadi, Navarra, 2007, págs 733 y 768.

\textsuperscript{97} SALINAS MOLINA, F.: El proceso civil, op.cit. pág. 5017.
Por su parte, el artículo 553 determina el contenido que debe tener el auto ejecutivo. En su número segundo se refiere a la cantidad por la que se despacha la ejecución. Asimismo, en el artículo 575 de la citada norma se regula que la ejecución se despachará por la cantidad que se reclame en concepto de principal e intereses ordinarios y moratorios vencidos, incrementado por la que se prevea para hacer frente a los intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y a las costas de ésta. La cantidad prevista para estos dos conceptos, que se fijará provisionalemente, no podrá superar el 30 por ciento de lo que se reclame en la demanda ejecutiva, sin perjuicio de su posterior liquidación.

Entiende Salinas Molina\textsuperscript{98} que como el auto que despacha la ejecución posibilita despachar ejecución y decretar embargos con relación a intereses de demora aún no devengados, esta traba “es de naturaleza más próxima a los embargos preventivos”.

¿Significa esto que el despacho de la ejecución por intereses tiene carácter automático?. Entiendo que, tal y como se puso de manifiesto en el epígrafe 6.2, si la sentencia condena al pago de intereses procesales, se deberá despachar el auto de ejecución por esa cantidad, pero el citado auto no puede “inventarse” una condena, que es competencia de la sentencia. El proceso de ejecución ejecuta lo juzgado, siendo esa su única competencia. Por lo tanto, si no existe condena al pago de intereses, el auto de ejecución no deberá hacer pronunciamientos en torno a los mismos. Cosa diferente es que, en la práctica forense de los Juzgados, el auto de ejecución sea un formulario de los llamados “de modelo” y se aplique automáticamente el treinta por ciento destinado al pago de intereses y costas.

7. El régimen jurídico actual de los intereses procesales: el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

La regulación actual de los intereses procesales se encuentra en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000.

Establece el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, bajo el epígrafe “Intereses de la mora procesal”, lo siguiente:

1. Desde que fuere dictada en primera instancia, toda sentencia o resolución que condene al pago de una cantidad de dinero líquida determinará, en favor del acreedor, el devengo de un interés anual igual al del interés legal del dinero incrementado en dos puntos o el que corresponda por pacto de las partes o por disposición especial de la ley.

2. En los casos de revocación parcial, el tribunal resolverá sobre los intereses de demora procesal conforme a su prudente arbitrio, razonándolo al efecto.

3. Lo establecido en los anteriores apartados será de aplicación a todo tipo de resoluciones judiciales de cualquier orden jurisdiccional que contengan condena al pago de cantidad líquida, salvo las especialidades legalmente previstas para las Haciendas Públicas.

7.1. Ámbito de aplicación.

La Ley de Enjuiciamiento Civil establece, en el párrafo tercero del artículo 576, que lo previsto en este artículo se aplicará a todo tipo de resoluciones judiciales de cualquier orden jurisdiccional que contengan condena al pago de cantidad líquida, salvo las especialidades legalmente previstas para las Haciendas Públicas. Sin embargo, en el presente trabajo, tal y como se puso de manifiesto en la introducción, únicamente se va a estudiar el orden jurisdiccional civil, dejando también a salvo las especialidades de las Haciendas Públicas.

El artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se encuentra inserto en el Título IV del Libro III, que versa sobre la ejecución forzosa y las medidas cautelares. Es decir, nos encontramos en sede de ejecución. Por lo tanto, es claro que este artículo será aplicable a la ejecución, pero, ¿podrá aplicarse incluso si no se ha

---

99 Esta diferente regulación para la Hacienda Pública consistente, básicamente, en que cuando sea el pagador la Hacienda, no se le incrementará en dos puntos el interés debido, ha sido declarada constitucional, al entender el Tribunal Constitucional que “constituye una diferencia de trato razonable y no es contraria al artículo 14 CE” en, entre otras, la Sentencia del Tribunal Constitucional 206/93.
interes procesal e intereses moratorios en el ámbito civil. Pág.53/83

iniciado la ejecución?. Dicho de otro modo: ¿debe pagar intereses procesales el condenado a pagar en Sentencia que cumple voluntariamente?.

A este respecto, De Padura Ballesteros considera que sí puede exigirse el pago de los intereses procesales de aquél que ha pagado voluntariamente la cantidad a que fue condenado, y, por tanto, que tiene derecho a presentar demanda ejecutiva únicamente por dicha cantidad.

Sin embargo, en mi opinión dicha afirmación deberá matizarse en concordancia con la regulación de la ejecución. Se deben distinguir dos supuestos:

El primero, que el cumplimiento voluntario de la Sentencia se haya llevado a cabo en los primeros veinte días de la notificación de la misma. En este caso, desde mi punto de vista es claro que no cabe solicitar ejecución por los intereses. Así, en el artículo 548 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se establece un plazo de espera de la ejecución de resoluciones judiciales y arbitrales: “El tribunal no despachará ejecución de resoluciones judiciales o arbitrales o de convenios aprobados judicialmente dentro de los veinte días posteriores a aquel en que la resolución de condena o de aprobación del convenio haya sido notificada al ejecutado.” Si bien el artículo no menciona la finalidad de dicho plazo, es lógico pensar que se está dando un breve lapso de tiempo al litigante vencido para que cumpla voluntariamente. Entonces, si no se puede presentar demanda ejecutiva (o, más propiamente) despacharla, no debería admitirse que se presentara después (una vez abonado el principal en esos veinte días) por el pago de intereses, puesto que entiendo que se iría contra la finalidad del artículo 548 de la citada ley y daría lugar a un supuesto de enriquecimiento injusto.

El segundo caso es que el deudor cumpla voluntariamente, pero pasado el plazo de los veinte días del antecitado artículo 548 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En este caso entiendo que sí cabría presentar demanda ejecutiva únicamente por los intereses procesales devengados, aplicando la norma del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

7.1.1. Resoluciones Judiciales

El artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se refiere a todo tipo de resoluciones judiciales. Establece el artículo 245 de la Ley Orgánica del Poder Judicial el catálogo de resoluciones judiciales que tienen carácter jurisdiccional, enumerando providencias, autos y sentencias.

Es claro que el precepto se refiere a Sentencias propiamente dichas, pero se plantea si la fórmula tan amplia del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,

100 Padura Ballesteros, M.: “Los intereses procesales por demora…” op.cit, pág. 95.
Intereses procesales e intereses moratorios en el ámbito civil. Pág.54/83

que se refiere a “Sentencia o resolución”, incluye también las resoluciones que no son Sentencias. En este sentido, apunta Salinas Molina\textsuperscript{101} que abarca los autos, o, en su caso, aquellas resoluciones que hubieran adoptado la forma de providencia (aunque su forma no fuese procesalmente correcta), en las que se contenga condena al pago de cantidad líquida, bien de forma directa o indirecta (por sustitución de obligaciones de hacer, no hacer o entregar).

Personalmente, estoy de acuerdo en que el precepto se aplicará a todas las resoluciones judiciales que impongan la obligación de pago de una cantidad líquida, puesto que el precepto se refiere a “Sentencia o resolución”. En este sentido, se puede apuntar aquí el Anteproyecto de Ley de Reforma de la Legislación Procesal para la implantación de la Nueva Oficina Judicial, del Ministerio de Justicia, de 18 de julio de 2008\textsuperscript{102}. En este anteproyecto se faculta al Secretario Judicial para dictar “Decretos”, resoluciones que podrán terminar procedimientos o imponer obligaciones a las partes. Estos decretos, de llegar a hacerse efectivos, podrían incluirse en el listado de resoluciones a que se refiere el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Respecto a qué ocurre con las obligaciones de pago contenidas en títulos no judiciales\textsuperscript{103}, hay que decir que en la Ley de Enjuiciamiento Civil se regula la ejecución de títulos no judiciales, de manera muy similar, aunque no igual, a la ejecución de títulos judiciales.

Respecto a la aplicación del artículo 576 también a los títulos no judiciales, es favorable Salinas Molina\textsuperscript{104}. Dicho autor es también favorable a la aplicación del artículo en los casos de laudos arbitrales. Así, la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de arbitraje, establece que “la ejecución forzosa del laudo arbitral se regirá por lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil con las especialidades previstas en el presente título “(artículo 44). Continúa este autor diciendo que, “en último extremo, de no aceptarse la tesis expuesta, la obligación de abono de intereses por demora en el cumplimiento de obligaciones de pago de cantidades líquidas contenidas en títulos no judiciales, aún limitados al tipo legal sin incremento y necesitado el inicio de su

\textsuperscript{101} Salinas Molina, F.: \textit{El proceso civil}, op.cit. Págs. 5015.

\textsuperscript{102} No es la primera vez que se habilitan los Decretos como resolución exclusiva del Secretario Judicial, pero en la práctica han encontrado problemas en su aplicación, siendo anuladas por la generalidad de las Audiencias Provinciales. Han entendido unánimemente las Audiencias que, al no haberse modificado la Ley Orgánica del Poder Judicial y únicamente las leyes procesales, inferiores en categoría, son unas resoluciones nulas de pleno derecho por incompetencia del Secretario Judicial. Como ejemplos, Auto AP Toledo 71/07, sección 1ª, de 24 de octubre, JUR 2008/46766, también Sentencia AP Huesca 102/07, Sección 1ª, 19 de abril, JUR 2007/26358 y Auto AP Madrid 133/06, Sección 20, de 5 de mayo JUR 2006/192832. Pese a que la práctica ha demostrado que no pueden utilizarse los decretos sino con evidente riesgo de perjuicio al ciudadano, -que tendría una resolución en permanente peligro de ser declarada nula-, en el Anteproyecto citado se reforman todas las leyes procesales para incluir los decretos pero no la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por este motivo soy escéptica en cuanto a la posibilidad real de que los Decretos se incluyan en el pleno de resoluciones judiciales.

\textsuperscript{103} La Ley de Enjuiciamiento Civil regula la ejecución de resoluciones no judiciales, siempre que se trate de títulos que llevan aparejada ejecución (artículo 517).

\textsuperscript{104} Salinas Molina, F.: \textit{El proceso civil}, op.cit. pág. 5015.
devengo de un previo requerimiento, se deduciría, en todo caso, de lo dispuesto en los arts. 1100, 1101 y 1108 del Código Civil.”

En contra de la aplicación del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil a otros títulos diferentes de la Sentencia, LORCA NAVARRETE. 106

El Tribunal Supremo ha fallado a favor de incluir también los autos en el ámbito de aplicación del artículo 921 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.881, (precedente del actual artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil vigente), si bien en el ámbito social, aplicando supletoriamente la Ley de Enjuiciamiento Civil. Así, en la Sentencia de 21 de febrero de 1.990107. Dice así: “El razonamiento nuclear del recurso es que el artículo 921 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se refiere exclusivamente a la ejecución de las sentencias, y no puede ser extendido en su aplicación a las resoluciones judiciales que adopten la forma de autos... Los argumentos del recurrente no pueden prosperar...los términos literales del art. 921 de la Ley de Enjuiciamiento Civil no se compaginan con la interpretación restrictiva que el recurrente propone. En efecto, el párrafo quinto de este artículo habla para describir su campo de aplicación, de «todo tipo de resoluciones judiciales» y no sólo de sentencias”.

7.1.2. La condena a una cantidad líquida

El devengo del interés por mora procesal requiere la existencia de una sentencia o resolución que condene al pago de una cantidad de dinero líquida, por lo que quedan excluidos cualesquiera otros títulos distintos a las resoluciones judiciales condenatorias, o cuando la cantidad de dinero no sea líquida porque el principal no esté determinado. 108

Sobre cuándo puede considerarse líquida la condena al pago, entiende SALINAS MOLINA109 que “no hay liquidez cuando la obligación consista en el pago de una cantidad cuya determinación dependa de un juicio previo encaminado a precisarla pero si se da, en cambio, cuando la fijación del quantum dependa exclusivamente de operaciones matemáticas; debiendo estarse ahora en este extremo a lo establecido fundamentalmente en el artículo 572.1110 Ley de Enjuiciamiento Civil.”

---

106 LORCA NAVARRETE, A.M.: Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil op.cit, pág. 2805.
107 Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de febrero de 1990, Sala de lo Social, RJ Aranzadi 1990/1130.
108 LORCA NAVARRETE, A.M.: Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil op.cit Pág. 2805
110 El artículo 572.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, relativo a “Cantidad líquida. Ejecución por saldo de operaciones”, dice así: “Para el despacho de la ejecución se considerará líquida toda cantidad de dinero determinada, que se exprese en el título con letras, cifras o guarismos comprensibles. En caso de disconformidad entre distintas expresiones de cantidad, prevalecerá la que conste con letras. No será preciso, sin embargo, al efecto de despachar ejecución, que sea líquida la cantidad que el ejecutante solicite por los intereses que se pudieran devengar durante la ejecución y por las costas que ésta origine.”
7.2. El procedimiento de liquidación de los intereses. Su regulación

La Ley de Enjuiciamiento Civil no ha regulado expresamente el procedimiento de liquidación de los intereses procesales. Por lo tanto, se plantea el problema de cuál será la normativa aplicable.

La mayoría de la Jurisprudencia entiende que, aunque nada se diga en la Ley de Enjuiciamiento Civil, el procedimiento aplicable será el de los artículos 712 y siguientes de la misma ley procesal\textsuperscript{111}.

Los artículos 712 y siguientes se refieren al procedimiento de liquidación de daños y perjuicios, frutos y rentas y la rendición de cuentas, en el Capítulo IV del Título V del Libro III de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Este procedimiento supone que, en la sede del proceso de ejecución, una vez se ha pagado el principal, el ejecutante presentará (por sí mismo, o, con frecuencia, instado por el órgano judicial), solicitud de liquidación de intereses y propuesta de tasación de costas, normalmente a un tiempo, aunque llevando cada una tramitación separada, dado que tienen tramitación y naturaleza diferente.

Sin embargo, es importante apuntar que existe una gran cantidad de casos en que no es necesario acudir al procedimiento de ejecución para liquidar los intereses procesales. Así lo afirma Salinas Molina\textsuperscript{112}:

“la necesidad de practicar la liquidación de intereses para posibilitar el cumplimiento voluntario del obligado a su pago o fundamentar la entrega o devolución de las cantidades consignadas previamente no obliga necesariamente a iniciar el proceso de ejecución”. Y ello aunque parezca una paradoja, pues el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se encuentra en la regulación de la ejecución.

El supuesto al que me estoy refiriendo es que el condenado abone la cantidad de principal en el proceso declarativo, tras la notificación de la sentencia o, incluso, la cantidad de principal más una cantidad que es la estimada por el condenado para el pago de intereses (esto suelen hacerlo muy a menudo las compañías de seguros). En este caso, simplemente se da traslado a la contraparte de la consignación y, si hay acuerdo, se abona.

En cuanto a quién es el competente para hacer la liquidación de intereses, nos encontramos de nuevo con la ausencia de regulación, lo que hace que no se pueda dar una respuesta categórica.

\textsuperscript{111} Así lo manifiesta, por ejemplo, la Audiencia Provincial de Valencia en el en su auto 221/03, de 6 de noviembre de 2003.
\textsuperscript{112} Salinas Molina, F.: El proceso civil, op.cit., pág. 5005.
Así, la tasación de costas se atribuye al Secretario Judicial\textsuperscript{113}, en tanto que nada se especifica sobre la autoría de la liquidación de intereses.

Sí se ha establecido una norma clara en el ámbito de la ejecución laboral, donde se dispone expresamente, en los arts. 267.1 y 2 de la Ley de Procedimiento Laboral, que establecen que “cubierta la cantidad objeto de apremio en concepto de principal, el secretario practicará diligencia de liquidación de los intereses devengados”, así como que “la liquidación de intereses podrá formularse al tiempo que se realice la tasación de costas y en la propia diligencia. Si se impugnaran ambas operaciones, su tramitación podrá acumularse”.

Salinas Molina\textsuperscript{114} ha argumentado a favor de que la liquidación de intereses la efectúe el Secretario Judicial diciendo que la competencia del Secretario Judicial para efectuar la liquidación de los intereses “deriva de la falta de norma expresa que indique que deba efectuarse mediante resolución que revista la forma de auto o providencia, por lo que deberá efectuarse por el secretario a través de diligencias de ordenación”.

En cambio, Padura Ballesteros\textsuperscript{115} entiende que “la liquidación de intereses debe hacerse directamente en el auto por el que el Juez despacha ejecución”. Y lo argumenta diciendo que no se pueden ejecutar condenas ilíquidas, y que por tanto debe concretarse en la fase inicial del proceso la cuantía a que ascienden los intereses. Y, además, argumenta que no es necesario dar trámite al ejecutado de dicha liquidación antes del despacho de la misma.

Según esta autora, para liquidar los intereses en el auto que despacha la ejecución, deberán calcularse “hasta que la sentencia sea completamente ejecutada”. Así “si bien los intereses procesales no son líquidos (en el momento de despachar la ejecución), al menos son liquidables (...) porque la fijación del quantum depende de una simple operación aritmética.”. En conclusión, esta autora aboga por la innecesariedad de acudir al procedimiento de liquidación de frutos y rentas.

A mi juicio, creo que la tesis de esta autora plantea dos tipos de problemas, de Padura Ballesteros en este punto: conceptuales y procesales.

Desde el punto de vista meramente teórico, considero que es una contradicción en si misma la afirmación de que no podrá ejecutarse cantidad ilíquida y, sin embargo, añadir una cantidad que es indeterminada en el momento en que se

\textsuperscript{113} Establece el artículo 243 de la Ley de Enjuiciamiento Civil: “Práctica de la tasación de costas. En todo tipo de procesos e instancias, la tasación de costas se practicará por el Secretario del tribunal que hubiera conocido del proceso o recurso, respectivamente, sujetándose a las disposiciones de este Título”.

\textsuperscript{114} Salinas Molina, F.: El proceso civil, op.cit., pág 5023.

\textsuperscript{115} Padura Ballesteros, M.: Los intereses procesales por demora..., op.cit, págs. 201 a 204.
Intereses procesales e intereses moratorios en el ámbito civil.

despacha la ejecución (los intereses hasta que la sentencia sea completamente ejecutada).

Por otro lado, desde el punto de vista procesal, no es posible no dar trámite al ejecutado de la liquidación antes del despacho de la ejecución. Y ello porque se le causaría una grave indefensión que podría ser objeto de una nulidad, dado que en el proceso civil todas las actuaciones deben ser conocidas por ambas partes.

Incluso se ha establecido en esta nueva Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 un sistema por el cual los Procuradores (en el caso de partes personadas), han de trasladarse entre ellos y con carácter previo, los escritos que van a presentar ante el Tribunal. Así, esta obligación se establece en el artículo 276 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y en el artículo siguiente del mismo texto legal, el 277, se regula la sanción para la falta de traslado previo de copias entre Procuradores, cual es la no admisión de la presentación del escrito ante el Tribunal.

Por otro lado, y a fin de sostener mi argumentación, si bien es cierto que la cantidad por la que se despacha ejecución en cuanto a los intereses debe poderse fijar mediante operaciones aritméticas, esto no significa que la cantidad sea indiscutida.

Así, a modo de ejemplo, en el artículo 573.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se establecen una serie de requisitos que debe cumplir quien presenta una demanda de ejecución de título no judicial en los casos de la llamada “ejecución por saldo de operaciones”, que son aquéllas que se despachan “por el saldo resultante de operaciones derivadas de contratos formalizados en escritura pública o en póliza intervenida por Corredor de Comercio Colegiado, siempre que se haya pactado en el título que la cantidad exigible en caso de ejecución será la resultante de la liquidación efectuada por el acreedor en la forma convenida por las partes en el propio título ejecutivo”.

Es decir, es el caso típico del préstamo formalizado notarialmente, donde, en la escritura, constan las operaciones de cálculo. Pues bien, en este supuesto y siguiendo a PÁDURA BALLESTEROS ¿no es acaso clara la cantidad por la que debe despacharse la ejecución?

Y sin embargo, el artículo 572 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, in fine, determina que únicamente se despachará ejecución si el acreedor acredita haber notificado previamente al ejecutado la cantidad exigible. Y este requisito se impone para que el deudor pueda comprobar que la cantidad que le exigen se ha calculado conforme al título. Y ello no le resta la facultad de oponerse posteriormente a la ejecución por los motivos tasados en la propia ley. Todo ello se debe a que la Ley de Enjuiciamiento Civil es muy garantista, y prima el derecho a la información y al recurso.
Por todas las razones antedichas no estoy de acuerdo con la postura de PADURA BALLESTEROS y considero que es más adecuado el procedimiento antes descrito de aplicar los artículos 712 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil tras el pago del principal por el obligado a ello.

Se refiere también al problema de la cuantificación de los intereses procesales ÁNGEL FERNÁNDEZ (durante la vigencia de la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil), quien entiende que “probablemente una de las operaciones más complejas a que el Juez debe proceder en ejecución de Sentencias es al cálculo de la deuda total por intereses”. Y continúa diciendo que como los intereses procesales (ex artículo 921) nacen “como consecuencia de la simple existencia de la sentencia, sin necesidad de que la sentencia los concrete, ni siquiera que se refiera a ellos”, se plantean dificultades a la hora de su cómputo.

En cuanto al procedimiento adecuado para su cuantificación, no aclara el autor cuál sería procesalmente el adecuado, pero sí da una serie de reglas a fin de llegar a su determinación. Así, continúa este autor diciendo que se calcularán los intereses:

a) tomando como base la cantidad líquida que fija la sentencia de primera instancia.

b) contando desde el día en que se dictó sentencia en primera instancia, aunque matiza estar a favor de que el cómputo comience cuando la sentencia es notificada.

c) hasta que la sentencia sea completamente ejecutada.

En cuanto a lo dicho por ÁNGEL FERNÁNDEZ, no puedo sino estar de acuerdo en los planteamientos generales por él descritos. Así, el procedimiento previsto en los artículos 712 y siguientes es simplemente una concreción en la aplicación de los principios generales descritos por dicho autor.

---

116 ÁNGEL FERNÁNDEZ, M., Derecho procesal civil, op.cit., pág 197.
117 ÁNGEL FERNÁNDEZ, M., Derecho procesal civil, op.cit., pág 197.
8. Cuantía de los intereses procesales.

La cuantía de los intereses procesales dependerá de los siguientes factores, que se estudiarán separadamente:

1) Día de inicio del cómputo
2) Día de fin del cómputo
3) El interés aplicable
4) La cantidad a que se aplican los intereses
5) El orden del pago en la ejecución
6) El anatocismo

8.1. Dies a quo

En líneas generales se puede decir que el momento de comienzo del devengo de intereses es el momento de la sentencia o resolución que condenó al pago de la cantidad líquida.

Sin embargo es importante matizar, ya que debemos estudiar si es o no necesaria la firmeza de la sentencia o resolución que condena al pago de intereses.

En torno a la pregunta de si es o no necesaria la firmeza de la sentencia que condena al pago de intereses para que comiencen a devengarse intereses, la respuesta debe ser afirmativa, pero con matices. La Jurisprudencia mayoritaria del Tribunal Supremo establece que es necesario que la sentencia sea firme para que sea obligatorio el pago de intereses, pero su cómputo comenzará desde que se dictó la misma. En este sentido Salinas Molina, quien afirma que en caso de recurso el momento del comienzo del devengo de intereses se retrotrae al momento dictarse la sentencia, sin esperar a su firmeza.

---

Como ejemplo, la reciente Sentencia del Tribunal Supremo\textsuperscript{119} que reitera la doctrina clásica del tribunal, pero referida ahora al artículo 576 de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 (cuyo antecedente era el artículo 921 de la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881). Así, el Fundamento Jurídico Séptimo declara que “procede conceder los intereses señalados en el artículo 921, no desde la fecha de la sentencia de apelación, sino desde la del Juzgado”.

Encontramos alguna Sentencia del Tribunal Supremo que utiliza un criterio diferente. Así podemos encontrar la Sentencia de 18 de marzo de 1993\textsuperscript{120}, en que en casación se revoca la sentencia de la Audiencia Provincial y se condena a pagar intereses desde esta última, en vez de utilizar el criterio general de condenar a pagar intereses desde la Sentencia de la primera instancia. Sin embargo, el propio Tribunal Supremo argumenta que esta decisión no supone un cambio de criterio, dado que la Sentencia de apelación es el momento en que se fija la cantidad indemnizatoria, no la Sentencia de primera instancia (que fue desestimatoria de la demanda). Dice así el tribunal: “Ha de puntualizarse que los intereses legales nacen en el presente caso desde la fecha de la sentencia de apelación que, al revocar la absolutoria de la instancia, fija la cantidad indemnizatoria, que de esta manera adquiere la condición de líquida, toda vez que no surge de relaciones, obligaciones o títulos jurídicos que la podrían engendrar, sino que parte de haberse producido hechos determinantes de responsabilidad extracontractual, que exigen la previa declaración judicial de su concurrencia para generar las consecuentes indemnizaciones reparadoras. En razón a lo explicitado, es procedente aplicar la legalidad que el precepto contiene en su texto relacionante y fijar como fecha del cómputo del plazo inicial de los intereses devengados, no la correspondiente al emplazamiento del recurrente y condenado, como declara la sentencia que se revisa, sino la de la fecha de la misma hasta su cumplido pago”.

\textsuperscript{119} Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1º, número 54/2006, de 8 de febrero de 2002, EDJ 2006/6316, recurso 721/1999. En este caso el demandante solicita que se dicte sentencia por la que se condene a la demandada al pago de XXX pesetas, más los intereses legales desde el origen de la deuda, con expresa imposición de costas a la demandada. La Sentencia de primera instancia estima parcialmente la demanda y condena a la demandada a abonar X pesetas (menos de lo pedido), más los intereses legales desde la fecha de interposición de la demanda, sin hacer expresa imposición de costas. La Sentencia de Apelación revoca la de instancia y estima íntegramente la demanda, condenando al pago de XXX pesetas más sus intereses legales incrementados en dos puntos desde la fecha en que le fue exigible dicho importe hasta su completo pago. Finalmente, el Tribunal Supremo condena a la demandada al pago de XXX, la cual devengará a favor del acreedor, desde la fecha de la primera instancia, un interés anual igual al del interés legal incrementado en dos puntos hasta que sea totalmente ejecutada.

\textsuperscript{120} Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1º, ponente Villagómez Rodil, de 18/03/1993, EDJ 1993/2726, RJ Aranzadi 1993/2400.
8.2. Dies ad quem

En relación a la cuestión de cuándo termina el devengo de los intereses procesales, el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 ha eliminado la referencia de su predecesor, el artículo 921 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 que establecía “hasta que (la sentencia) sea completamente ejecutada”, por lo que no se establece expresamente en el artículo cuál es el momento final del pago. Sin embargo, se puede fácilmente sobreentender de la lectura del artículo la antedicha interpretación.

Dicho esto, es necesario hacer una mención al caso en que se paga lo debido a través de la cuenta del juzgado (Cuenta de Depósitos y Consignaciones). En este caso se plantea cuál es la fecha final del devengo de intereses. Porque se puede considerar que el devengo de intereses termina, o bien con el ingreso por el deudor en dicha cuenta judicial, o, al contrario, con el cobro efectivo de esa cantidad por el acreedor de la misma. Y se debe distinguir, a su vez, entre los supuestos en que nos encontramos en fase ejecución de sentencia de aquellos en que la sentencia o resolución no es firme y no se está ejecutando.

En lo relativo a los supuestos de pagos en ejecución de sentencia, es importante determinar, pues, si el devengo de intereses finaliza con el ingreso en la cuenta judicial o con el pago efectivo a la ejecutante. Aunque pueda parecer baladí, dicha cuestión se plantea con frecuencia. Y ello porque, dependiendo de diversos factores (por ejemplo la dinámica del Juzgado, de la rapidez con que el Secretario Judicial expida el mandamiento de devolución, un error al hacer el ingreso en el número de cuenta...), la diferencia entre una fecha y otra puede suponer una considerable cantidad de dinero. En este sentido es unánime la postura jurisprudencial, tanto del Tribunal Supremo como del resto de los tribunales en el sentido de entender que el cómputo de intereses finaliza con el ingreso en la cuenta judicial y no con el pago efectivo al acreedor (cuando se expide el mandamiento de devolución correspondiente).

Así lo afirma el Tribunal Supremo, entre otras, en Sentencias de 27 de febrero 1999. En sus fundamentos de derecho cuarto y sexto, establece que: “...la consignación efectuada por esta parte es una verdadera consignación y produce, desde la fecha en que se efectúa, todos los efectos del pago...la fijación de la fecha final del devengo de intereses, en cuanto que la misma debe establecerse....en coincidencia con la del ingreso bancario que tuvo lugar, máxime, cuando el Juzgado lo tuvo por hecho en providencia de 1 de febrero de 1994, y cuando no es posible omitir que estamos en presencia de un incidente en ejecución de sentencia, por lo
que la prevalencia de la fecha primeramente señalada no implica contrariar lo dispuesto en los artículos 1176\(^{122}\) y siguiente del Código Civil.”.

A mi entender, es muy acertada esta postura del Tribunal Supremo, puesto que no considero aplicable a este punto la normativa del Código Civil relativa a la extinción de las obligaciones\(^{124}\) (pago – artículo 1170-, consignación para pago – arts. 1176 y ss.-), y ello porque en la ejecución de una resolución judicial nos encontramos ante un supuesto diferente de la consignación judicial regulada en el Código Civil entre iguales, que tiene carácter voluntario. Estamos, sin embargo, ante una ejecución forzosa, donde la retención de los ingresos del deudor tiene carácter obligatorio y debe regirse por la normativa de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Estudiado el supuesto de la ejecución judicial, se pasará ahora a exponer qué ocurre con el devengo de intereses en los casos en que todavía nos encontramos en la fase declarativa del proceso, antes o después de dictar la sentencia que condena al pago de intereses.

En estos supuestos, la consignación de lo debido en la Cuenta del Juzgado, ¿tiene o no la virtualidad de paralizar el devengo de intereses?.

Dado que está expresamente previsto este efecto para las compañías aseguradoras en la Ley del Contrato de Seguro\(^{125}\), jurisprudencialmente se ha extendido a otros ámbitos civiles, de modo que el condenado al pago de una cantidad que la consignaba en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones mostraba una voluntad de cumplir que le eximía del pago de intereses. Así, por ejemplo, el Tribunal Supremo\(^{126}\) ha dicho: “...que la declaración del Tribunal a quo rechaza la concesión de intereses en este concreto caso por estas tres razones: ...porque tan pronto formularon la reconvención de los deudores han depositado en el Juzgado de Instancia las cantidades reclamadas y están ingresadas en la Caja General de Depósitos...”.

Personalmente, si bien estoy de acuerdo con la anterior postura jurisprudencial bajo la vigencia de la anterior Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.881, sin embargo creo que dicha postura debería revisarse tras la aprobación Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, en los casos en que existe condena al pago de intereses pero la sentencia no ha adquirido todavía firmeza.

---

\(^{122}\) Los artículos 1.176 y siguientes del Código Civil se refieren al ofrecimiento de pago y la consignación.


\(^{125}\) Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, artículo 20 “Se entenderá que el asegurador incurre en mora cuando no hubiere cumplido su prestación en el plazo de tres meses desde la producción del siniestro o no hubiere procedido al pago del importe mínimo de lo que pueda deber dentro de los cuarenta días a partir de la recepción de la declaración del siniestro”.

Entiendo que hoy no puede sostenerse la utilidad de la consignación para evitar el pago de intereses, por el juego de la ejecución provisional (que es una novedad de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000).

La posibilidad de ejecución provisional en todos los casos de condena al pago de una cantidad de dinero sin necesidad de hacer un ingreso a modo de depósito es una novedad de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000. La posibilidad generalizada de ejecución provisional entiendo que priva el sentido de la consignación de la cantidad consignada. Y ello porque si el favorecido por la Sentencia quiere obtener el montante de la misma, únicamente debe presentar una demanda de ejecución provisional y esa cantidad le será abonada, por lo que no tiene sentido que permanezca ingresada en el Juzgado. Si, por el contrario, prefiere esperar a cobrar al resultado del recurso y no solicitar la ejecución provisional, tampoco tiene sentido que esa cuantía quede ingresada en el Juzgado, sin beneficiar a ninguna de las partes. Es por ello que entiendo que la consignación no debe servir para paralizar el pago de intereses y deberá ser devuelta al consignante.

8.3. Tipo de interés.

En la regulación legal, la cuantía será, según el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el interés legal del dinero incrementado en dos puntos o el que corresponda por pacto de las partes o por disposición especial de la ley. Es decir; el interés será: primero, el que la ley determine; segundo, el pactado por las partes; tercero, el legal incrementado en dos puntos. El interés legal es que fija la Ley de Presupuestos, de vigencia anual. Si el interés se devenga durante varios años, va cambiando con las modificaciones que experimente el interés legal.

En la aplicación diaria del precepto, si bien la norma del artículo 576 parece clara, es aquí donde se plantean la mayor parte de problemas en la práctica, en relación a los intereses pactados. Y ello porque lo normal es que se pacten intereses en la relación obligatoria a cuyo cumplimiento obliga la sentencia, pero no para el supuesto de ejecución procesal. Es decir; se plantea el problema de compatibilizar intereses moratorios y procesales y la cuantía de los mismos, así como la posibilidad de anatocismo (la solución a esta cuestión se estudia en los epígrafes 4, 8.4 y 8.5).

127 Uno de los supuestos de más frecuente aplicación en la práctica es el del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro, Ley 50/80, de 8 de octubre. En el punto 4 del artículo 20 establece que “La indemnización por mora se impondrá de oficio por el órgano judicial y consistirá en el pago de un interés anual igual al del interés legal del dinero vigente en el momento en que se devengue, incrementado en el 50 %; estos intereses se considerarán producidos por días, sin necesidad de reclamación judicial. No obstante, transcurridos dos años desde la producción del siniestro, el interés anual no podrá ser inferior al 20 %.”. En la interpretación de este precepto ha habido mucha jurisprudencia discordante. El Tribunal Supremo, el 1 de marzo de 2007 ha dictado Sentencia que fija doctrina legal sobre el modo de aplicación de este precepto. Sentencia número 251/2007, del Pleno, Ponente Seijas Quintana, RJ Aranzadi 2007/798.
8.4. Cantidad a la que se aplica el tipo de interés.

Se regula este punto en el artículo 575 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, donde establece que “se despachará por la cantidad que se reclame en concepto de principal e intereses ordinarios y moratorios vencidos, incrementado por la que se prevea para hacer frente a los intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y a las costas de ésta. La cantidad prevista para estos dos conceptos, que se fijará provisionalmente, no podrá superar el 30 por ciento de lo que se reclame en la demanda ejecutiva, sin perjuicio de su posterior liquidación.”

Determinar cuál es la cantidad a la que se aplica el tipo de interés puede suscitar dudas en cuanto a si la cantidad de la que se parte es el principal de la condena, simplemente, o si, por el contrario, debemos sumar a este principal la cantidad a la que ascienden los intereses moratorios ya devengados.

Entiende Ángel Fernández 128 que “la cantidad que debe servir de base para el cálculo de los intereses procesales es el principal al que condena la sentencia, sin aumentarlo en la cantidad a que asciendan los intereses moratorios a los que la sentencia también condena”.

En mi opinión es ésta la postura más correcta, puesto que lo contrario sería incurrir en anatocismo129.

8.5. Orden del pago en la ejecución

En este epígrafe se va a hacer referencia a cuál es el orden en que deben pagarse los conceptos que se deben (principal, intereses y costas) en el procedimiento de ejecución.

La determinación del orden en el pago tiene importancia porque de la postura que se adopte puede depender la cantidad que finalmente se paga, o se cobra, por estos conceptos. Ello no ocurrirá si se abona todo lo debido al dictar el auto de ejecución, pero es frecuente en la práctica que no exista dinero suficiente, (ni bienes que realizar), en el patrimonio del deudor para pagar todos los conceptos debidos a un tiempo, por lo que van ingresándose cantidades que no cubren los conceptos (embargos de nómina o pensión, el efectivo de las cuentas bancarias….). En estos supuestos, la cantidad final que se abona (y se cobra), variará mucho según el sistema de pago que se adopte.

Existen dos posturas sobre el particular. Una primera, mayoritaria, cual es abonar en primer lugar el principal, posteriormente los intereses y por último las costas. Una segunda postura, minoritaria, aboga por abonar los intereses devengados hasta el momento del pago, con el sobrante el principal y por último las

128 Ángel Fernández, M., Derecho procesal civil, op.cit., pág 206.
129 Consultar epígrafe 8.5.
costas. La importancia económica de adoptar una u otra es grande, puesto que en la primera el principal va disminuyendo con las entregas de dinero, y de ese modo la cantidad que devenga intereses es cada vez menor hasta que se paraliza el devengo de intereses una vez abonado el principal. Sin embargo, con la segunda postura, se pueden hacer entregas de dinero que no supongan el pago de todos los intereses debidos hasta ese momento, por lo que se continúan devengando intereses de la misma cantidad, y no paraliza su devengo en tanto no se han abonado todos los intereses debidos más el principal.

Como ejemplo de defensa de la primera postura, se encuentra un estudio sobre esta cuestión hecho por Padura Ballesteros. La autora explica que existen dos sistemas de pago:

1) “que el dinero obtenido en fase de apremio se destine primero a la satisfacción íntegra del capital y sólo después a los intereses procesales”
2) “distribuyéndose lo obtenido entre el principal y los intereses procesales, de forma proporcional”

Continúa esta autora explicando las consecuencias económicas de utilizar uno y otro sistema (se resume el ejemplo):

“Supongamos que se deben 100 de principal, más intereses procesales al 10 por 100 de dos años (tiempo que dura la ejecución). De la ejecución se sacan 50 (dinero que sale del patrimonio del deudor):

Sistema 1: (se aplican a pagar principal)....se pagan un mínimo de 70 + intereses procesales 50 + intereses procesales + anatocísticos de 20.

Sistema 2: (se aplican proporcionalmente a principal e intereses procesales).... Se pagan 70 + intereses procesales 58,3 + anatocísticos de 20.”

Analizando este ejemplo, la autora afirma “que es mejor sistema el primero, porque el deudor paga menos, ya que la base sobre la que se siguen devengando intereses procesales es menor. También es más seguro, porque no siempre se puede obtener más cantidad de los bienes del deudor”.

Personalmente, soy también partidaria de la primera postura, porque la entiendo mucho más acorde con la regulación de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Padura Ballesteros, M.: Los intereses procesales por demora... op. cit., págs. 212 y 213.
Porque si bien es cierto que en la Ley de Enjuiciamiento Civil no se afirma expresamente en ningún artículo cuál debe ser el orden de pago, es necesario para hacer una interpretación sistemática de las normas de la Ley de Enjuiciamiento Civil relativas a la ejecución. En ellas encontramos, con carácter general, un ánimo de lograr la efectividad del crédito y por tanto la satisfacción del ejecutante, pero, al mismo tiempo, la idea de evitar un perjuicio innecesario al deudor.

Así, el artículo 584 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que “No se embargarán bienes cuyo previsible valor exceda de la cantidad por la que se haya despachado ejecución…”. Por otro lado, el artículo 592 de la misma norma establece, en la regulación del orden de los embargos, que “….el tribunal embargará los bienes del ejecutado procurando tener en cuenta la mayor facilidad de su enajenación y la menor onerosidad de ésta para el ejecutado…”. Asimismo, en los artículos 605 y 606 se establecen una serie de bienes inembargables del ejecutado y el 607 que, al embargar sueldos y pensiones del ejecutado, será inembargable un mínimo, según las normas del propio artículo, que se considera mínimo “de subsistencia”.

Por otro lado, entiendo que el orden de pago (principal + intereses + costas) se presupone en el artículo 575 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Así, establece el artículo 575, en su número primero, que la ejecución se despachará por la cantidad que se reclama en la demanda ejecutiva en concepto de principal e intereses ordinarios y moratorios vencidos, incrementada por la que se prevea para hacer frente a los intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y las costas de ésta. La cantidad prevista para estos dos conceptos, que se fijará provisionalmente, no podrá superar el treinta por ciento de la que se reclame en la demanda ejecutiva, sin perjuicio de posterior liquidación. Si la cantidad de los intereses devengados más las costas no puede exceder de un treinta por ciento al despachar ejecución, es claro que la ley dispone que con esta cantidad queda a salvo el derecho del ejecutante. No significa ello que no sea posible exceder dicha cantidad, pero sí que entiende el legislador que queda garantizado el derecho de cobro del ejecutante.

Si aplicamos la teoría de pagar los intereses en primer lugar y luego el principal, la cantidad que se abona se incrementa, y tanto más cuanto más pequeñas son las cantidades que se abonan en concepto de intereses, puesto que puede ocurrir que los intereses se devengan a velocidad mayor que las cantidades que se abonan –lo que ocurre con frecuencia en casos de retenciones de sueldos o pensiones de escasa cuantía–.

Esta concreta cuestión no se plantea en la ejecución laboral, puesto que se ha regulado expresamente en la Ley de Procedimiento Laboral, que en su artículo 267 establece: “1. Cubierta la cantidad objeto de apremio en concepto de principal, el Secretario practicará diligencia de liquidación de los intereses devengados. 2. La liquidación de intereses podrá formularse al tiempo que se realice la tasación de costas y en la propia diligencia. Si se
impugnarán ambas operaciones, su tramitación podrá acumularse.” Este artículo aboga por la primera postura, aquí defendida, y lo cierto es que sería deseable un artículo similar en la Ley de Enjuiciamiento Civil, puesto que su falta puede dar lugar a la existencia de dudas sobre este punto.

En cuanto a la segunda postura, su utilización en la práctica forense es muy extraña, pero existe jurisprudencia que la ha aplicado, procedente de dos Audiencias Provinciales: la de Madrid y la de Castellón.

La Audiencia Provincial de Castellón tiene una jurisprudencia unánime en torno a admitir la aplicación de los artículos 1.172 a 1.174 del Código Civil, relativos a la imputación de pagos, en el proceso de ejecución y en el ámbito de los intereses procesales. Y también aboga porque se paguen en ejecución primero los intereses y después el principal.

Dice así la citada Audiencia 131: “El artículo 1.173 se refiere a un supuesto específico, el de la existencia de una deuda en concepto de principal, y, derivada de ésta, otra de intereses, por...es de aplicación el artículo 1.173 Código Civil, conforme al cual, si la deuda produce interés, no podrá estimarse hecho el pago por cuenta de capital mientras no estén cubiertos los intereses, por lo que en este caso ha de imputarse el pago a los intereses adeudados y después al capital, pues lo contrario supondría convertir por la sola voluntad del deudor una deuda que produce intereses en una simple, en claro perjuicio del acreedor... Esta Sala no alcanza a ver la importancia de la distinción realizada por la Jugadora de instancia sobre las clases de interés por su procedencia u origen...”

Por ello, como señala el auto de esta Audiencia Provincial, Sección Tercera, de fecha 19 de febrero de 2002, no cabe argumentar que es distinta la naturaleza de los intereses civiles a que se refiere el mencionado artículo 1.173 Código Civil cuando regula la imputación de pagos, de los procesales que no devienen de una deuda entre los propios interesados, siendo la solución más acertada la consistente en hacer primero la imputación a los intereses, y, una vez saldados, al capital, por la simple razón de que -aún teniendo la obligación su origen en una resolución judicial, es indiscutible su naturaleza de obligación de pago de una suma líquida y por ello la aplicabilidad del artículo 1.173 Código Civil-...”

En cuanto a la Audiencia Provincial de Madrid, solo se ha encontrado una resolución al respecto, el auto de 19 de febrero de 2000 132. En los antecedentes de hecho se explica que se dictó por el juzgado de Instancia auto, en que de la cantidad

131 Auto 232, de 14 de noviembre de 2007 de la Sección Primera Audiencia Provincial de Castellón, dictado en recurso de reposición contra un Auto del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Castellón.
consignada para pago primero se abonaron los intereses devengados hasta ese momento y, con el sobrante, el principal (que no llegó a cubrirse) declarando que “la imputación de pagos se hará en primer lugar al pago de intereses, en segundo lugar a principal, y en tercer lugar a costas de primera y segunda instancia”.

Dicho auto se recurrió en apelación. En sus fundamentos jurídicos la Audiencia Provincial de Madrid argumenta que “el artículo 1173 Código Civil contiene una norma de carácter interpretativo y limitativa de la voluntad del deudor para el caso de que, teniendo una sola deuda productora de intereses frente a su acreedor, no puede imputar el pago parcial de lo debido al pago del principal sin estar antes satisfechos los intereses, ya que ello supondría convertir por la sola voluntad del deudor una deuda que produce intereses en una simple, en claro perjuicio del acreedor; si bien en el caso presente no se trata de una imputación de pagos hecha por el deudor, sino por la Sala sentenciadora, resulta aplicable la norma del artículo 1173, ya que no es admisible que el Tribunal altere la naturaleza de la deuda en el sentido antes indicado”.

8.6. El anatocismo

En este epígrafe se hará una exposición general del concepto del anatocismo para, después, tratar de responder a la siguiente pregunta: ¿pueden los intereses procesales generar a su vez nuevos intereses?, o, dicho de otro modo, ¿cabe el anatocismo procesal?.

El anatocismo consiste en que los intereses ya vencidos se acumulen al capital para, a su vez, devengar nuevos intereses. En palabras de Álvarez Olalla, “el anatocismo es el fenómeno por el cual los intereses vencidos y no satisfechos son, a su vez, susceptibles de generar intereses.”

La regulación del anatocismo en el ordenamiento jurídico español se encuentra, principalmente, en los siguientes artículos:

Artículo 1.109 del Código Civil: “Los intereses vencidos devengan el interés legal desde que son judicialmente reclamados, aunque la obligación haya guardado silencio sobre este punto. En los negocios comerciales se estará a lo que dispone el Código de Comercio. Los Montes de Piedad y Cajas de Ahorro se regirán por sus reglamentos especiales.”

Artículo 316 del Código de Comercio: “Los deudores que demoren el pago de sus deudas después de vencidas, deberán satisfacer desde el día siguiente al del vencimiento el interés pactado para este caso o, en su defecto, el legal. Si el préstamo consistiere en especies, para computar el crédito se graduará su valor por los precios que las mercaderías prestadas tengan en la plaza en que deba hacerse la devolución, el día siguiente al del vencimiento, o por el que determinen peritos, si la mercadería estuviera extinguida al tiempo de hacerse su

evaluación. Y si consistiere el préstamo en títulos o valores, el rédito por mora será el que los mismos valores o títulos devengaren, o, en su defecto, el legal, determinándose el precio de los valores por el que tengan en Bolsa, si fueren cotizables, o en la plaza, en otro caso, el día siguiente al del vencimiento.”

Artículo 317 del Código de Comercio: “Los intereses vencidos y no pagados no devengan intereses. Los contratantes podrán, sin embargo, capitalizar los intereses líquidos y no satisfechos, que, como aumento de capital, devengarán nuevos réditos.”

Artículo 318 del Código de Comercio: “El recibo del capital por el acreedor, sin reservarse expresamente el derecho a los intereses pactados o debidos, extinguirá la obligación del deudor respecto a los mismos. Las entregas a cuenta, cuando no resulte expresa su aplicación, se imputarán en primer término al pago de intereses por orden de vencimiento, y después al del capital.”

Artículo 319 del Código de Comercio: “Interpuesta una demanda, no podrá hacerse la acumulación de interés al capital para exigir mayores réditos.”

Artículo 341 del Código de Comercio: “La demora en el pago del precio de la cosa comprada constituirá al comprador en la obligación de pagar el interés legal de la cantidad que adeude al vendedor.”

La importancia económica de esta práctica se ve en el siguiente ejemplo, clásico de MAZAUD:134 una suma de dinero prestada a un interés del cinco por ciento anual se duplica en veinte años. Sin embargo, si los intereses son capitalizados, el mismo efecto se produce aproximadamente en catorce años. De esta manera, el crédito crece a un ritmo que puede ser inasumible por el deudor. En este sentido, la prohibición o limitación del anatocismo debe ponerse en relación con la limitación de la usura. Tal y como se verá en un epígrafe posterior, la limitación de la usura en nuestro ordenamiento jurídico continúa regulándose por la centenaria Ley de la Usura de 23 de julio de 1.908.

En el ámbito civil está contemplado en el artículo 1.109 del Código Civil “los intereses vencidos devengan el interés legal desde que son judicialmente reclamados, aunque la obligación haya guardado silencio sobre este punto”. La práctica del anatocismo no está prohibida en nuestro ordenamiento, pero es necesario requerimiento judicial de los mismos.136

135 La llamada Ley Azcárate se dictó para poner freno a las prácticas abusivas de los antiguos prestamistas, debido a que el interés que se pactaba era enteramente convencional. Según su principal autor, D. Gumsendino de Azcárate, la ley no trataba de eliminar el principio de la autonomía de la voluntad, sino de declarar la nulidad de aquellos contratos de préstamo que, por las condiciones en que se han llevado a cabo, “implican una falta real y positiva de conocimiento, esto es, un vicio en el fondo y, además, por aquella relación delicada en que se encuentra el orden jurídico con el orden ético que obliga al primero a imponer ciertas sanciones a las infracciones del segundo.”. La ley no fija una tasa de interés, superada la cual el contrato es usurario y, por tanto, nulo, sino que establece unos criterios que servirán al Tribunal para declararlo como tal.
Padura Ballesteros lo plantea del siguiente modo:

“Ante una demanda de capital e intereses moratorios cuyo nacimiento comienza con la reclamación judicial, sabemos que la sentencia condenará a) al pago del principal más intereses de mora desde la demanda hasta la sentencia b) a partir de la resolución de condena, a intereses procesales.

Partiendo de este esquema, lo que estoy planteando es qué sucede cuando continúa el impago. Si los intereses moratorios devengan intereses anatocísticos, ¿a partir de qué momento, cómo y hasta cuándo?...salvo pacto en contrario, el vencimiento es anual..., lo que significa que no podrán producirse intereses anatocísticos hasta que no haya transcurrido dicho período anual...Ahora bien, puesto que los intereses moratorios quedan embebidos a partir de la resolución judicial por los procesales, cuando ésta se dicte, los créditos por mora desaparecen, dejan de devengarse. La sentencia queda así constituida en el dies ad quem del último vencimiento de los intereses moratorios.”

El paso siguiente es plantearse cuál debe ser la cantidad sobre la que se devengan los intereses procesales, es decir, si se contabilizan sobre el principal a que ha condenado la Sentencia o sobre la suma de esta cantidad más los intereses moratorios (que se han devengado desde la demanda, desde la notificación de la misma o desde el requerimiento extrajudicial para constituir en mora al deudor, en su caso). Si aplicásemos los intereses procesales sobre los moratorios, se produciría un supuesto muy particular de anatocismo, porque los intereses moratorios devengarían procesales.

Padura Ballesteros sostiene que no es posible aplicar a los intereses moratorios un “anatocismo procesal” y sustituir la aplicación del artículo 1.109 del Código Civil por el 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil a partir de la Sentencia. Y ello porque, argumenta la autora, “lo que el legislador pretendió fue sustituir los intereses moratorios por los procesales superiores a partir de la resolución judicial, pero no los moratorios anteriores y su régimen de incumplimiento”.

Por lo tanto, siguiendo a la antecitada autora, el devengo de intereses será como sigue:

“ a) Moratorios, desde la demanda hasta la sentencia.

b) Anatocísticos del artículo 1.109 del Código Civil, desde el vencimiento de los moratorios hasta el completo pago

c) Procesales, a partir de la sentencia, sólo sobre el capital”.

A partir de este punto, en que hemos despejado la posibilidad de que los intereses moratorios devenguen procesales, se deberá estudiar si los intereses procesales deberán devengar a su vez intereses. Esta, que puede parecer una pregunta harto teórica, es de gran importancia en la práctica, puesto que tiene grandes consecuencias económicas. En los procedimientos que han llevado varios años en ejecución sin haber conseguido abonar apenas montante del principal o no lo ha pagado en absoluto (porque, por ejemplo, no se han encontrado bienes o el deudor va pagando muy poco a poco mediante la retención de un sueldo no muy alto o de una pensión), si se devengan intereses de intereses procesales, la cantidad debida puede superar e incluso doblar el principal.

De Padura Ballesteros\textsuperscript{139} opina que los intereses procesales no pueden devengar nuevos intereses dado que el artículo 921 (hoy 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), establece, en su opinión, que la cantidad que devengará intereses será la establecida en la condena. Y ello porque el juez que ejecuta lo que hace es liquidar la sentencia, pero no puede añadir una nueva condena al pago de intereses a los que no haya condenado el Tribunal de instancia. Sin embargo, entiende esta autora que sí cabe el devengo de intereses anatocísticos del artículo 1.109 del Código Civil sobre los intereses procesales vencidos, pero no los del artículo 576 (que sería incrementar en dos puntos el legal). Así, en resumen, termina De Padura Ballesteros afirmando que el devengo de intereses queda como sigue:\textsuperscript{140}

\begin{quote}
"a) Moratorios, desde la demanda hasta la sentencia.

b) Anatocísticos del artículo 1.109 del Código Civil sobre los moratorios vencidos hasta el completo pago.

c) Procesales, desde la sentencia sólo sobre el principal.

d) Anatocísticos del artículo 1.109 del Código Civil sobre los procesales vencidos”.\end{quote}

Está en contra de la aplicación de la capitalización de intereses procesales el Tribunal Supremo. Así lo establece en la Sentencia de la Sala de lo Civil de 27 de febrero de 1999\textsuperscript{141}, que afirma “tener en cuenta que en nuestro ordenamiento no existe ninguna norma sobre capitalización de intereses. No obstante, nuestro ordenamiento jurídico está inspirado en el principio general del favor debitoris y, tal posibilidad de capitalización de intereses no se encuentra avalada por el artículo 921 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ni, aún menos, en el artículo 1109 del Código Civil al autorizar únicamente que los intereses vencidos devengarán el interés legal desde que son judicialmente reclamados”. En esta interesante Sentencia, el Alto Tribunal resuelve un supuesto en que el Juzgado de Instancia, al resolver sobre un incidente de impugnación de intereses en fase de ejecución (de una menor cuantía),

\textsuperscript{139} Padura Ballesteros, M.: \textit{Los intereses procesales por demora...} op.cit., pág. 124.

\textsuperscript{140} Padura Ballesteros, M.: \textit{Los intereses procesales por demora...} op.cit., pág. 126.

\textsuperscript{141} Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, Ponente Barcala Trillo-Figueroa, número 177/1999, de 27 de febrero de 1999, EDJ 2751/1999, RJ Aranzadi 199/1135.
Intereses procesales e intereses moratorios en el ámbito civil. Pág.73/83

acepta la liquidación del ejecutante, en que se contabiliza un interés compuesto. Posteriormente, la Audiencia Provincial resuelve concretando la cantidad debida por intereses, pero no entra en el tema de la capitalización. En la Sentencia de casación, sin embargo, se hace una larga fundamentación sobre el tema en cuestión, diciendo, en su fundamento de derecho cuarto, lo siguiente:

“No se conoce ninguna resolución judicial en que se hayan liquidado los intereses previstos en el artículo 921 de la Ley de Enjuiciamiento Civil al interés compuesto o, dicho de otro modo, capitalizando los intereses devengados en cada periodo anual por la cantidad líquida objeto de condena para que devenguen intereses en el siguiente periodo anual.

Ni la ley procesal ni el Código Civil contienen previsión alguna sobre capitalización de intereses; no hay norma, en nuestro sistema legal, que permita el cálculo de intereses en la forma aprobada por el Auto recurrido. Así lo viene a reconocer el propio auto en su razonamiento jurídico primero. El Código Civil, que no es aplicable al supuesto contemplado, establece el devengo de intereses por los intereses vencidos desde que son reclamados judicialmente, pero no que los intereses devengados a partir de la reclamación judicial por el principal y los intereses vencidos puedan, anualmente, capitalizarse y devengar intereses en el próximo periodo anual.

El auto que se recurre contraría lo ejecutoriado, pues está aprobando y haciendo suya una liquidación de intereses no ajustada al artículo 921 de la Ley de Enjuiciamiento Civil tanto por liquidarlos a interés compuesto, efectuando una capitalización de intereses no prevista ni permitida, como por fijar una fecha final de devengo de intereses distinta de la que establece dicho artículo.”

En contra de lo manifestado por el Tribunal Supremo, el Auto de la Audiencia Provincial de Madrid de 30 de septiembre de 2004\(^{142}\). En este supuesto se resuelve una apelación contra un auto de un Juzgado de Instancia que resuelve una impugnación a la liquidación de intereses en ejecución de sentencia. Entre otras muchas razones para que sea recurrida la resolución, la recurrente (ejecutada en la instancia), alega la práctica de anatocismo. A este respecto, la Audiencia falla “como quiera que en el presente caso las partes expresamente estipularon en el contrato de préstamo esta posibilidad… nada ha de objetarse a la capitalización de intereses.” Si bien, estudiada la resolución, parece que en el ánimo del órgano han pesado mucho, a la hora de dictar la resolución, razones procesales y no de fondo. Y digo esto porque la Audiencia pone de manifiesto que todas las razones alegadas por la recurrente son extemporáneas, dado que debieron ponerse de manifiesto o bien en el pleito principal o bien en la oposición a la ejecución.

No se encuentran en el Tribunal Supremo pronunciamientos favorables a que los intereses procesales generen nuevos intereses en la jurisdicción civil. Sin embargo, en la jurisdicción social, aplicando supletoriamente la Ley de Enjuiciamiento Civil, encontramos en la Jurisprudencia del Tribunal Supremo un caso de anatocismo procesal\textsuperscript{143}, dictado en un recurso de casación para unificación de doctrina, donde se plantea “determinar si en ejecución definitiva una vez abonadas las cantidades adeudadas en concepto de principal y ya liquidados, en la resolución oportuna, los intereses procedentes «ex» artículo 921 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la demora en el abono efectivo de las cantidades por tal concepto fijadas genera a su vez el devengo de intereses con fundamento en la propia norma procesal civil aplicable supletoriamente al proceso de ejecución laboral.”

Entiende la Sala Social del Tribunal Supremo que el fundamento para permitir el devengo de intereses sobre los intereses procesales está en el “derecho del ejecutante a ser indemnizado de los daños y perjuicios sufridos, no sólo en el supuesto de incumplimiento total o parcial, sino también, cuando el ejecutado en el cumplimiento de sus obligaciones, objeto de ejecución, incurra en dolo, negligencia o morosidad o cuando de cualquier modo contraviniere al tenor de aquéllas.”

Asimismo, argumenta el Tribunal que los intereses moratorios del artículo 921 de la Ley de Enjuiciamiento Civil tienen, primordialmente, un fundamento indemnizatorio, así “se justifica que los intereses líquidos de demora no abonados oportunamente generen a su vez nuevos intereses de demora... Entender lo contrario y no permitir esa nueva responsabilidad indemnizatoria por el retraso sufrió comportaría una nueva lesión patrimonial que el ejecutante no tendría el deber de soportar, ya que sólo partiendo de que la indemnización debe cubrir todos los daños y perjuicios sufridos hasta conseguir la reparación integral de los mismos se logra la indemnidad del derecho subjetivo o del interés lesionado, es decir, se cumple la exigencia constitucional de que la tutela judicial sea efectiva y, por tanto, completa.”

En mi opinión, no hay base legal para aplicar intereses anatocísticos sobre los intereses procesales, dado que esta operación no puede fundamentarse en ningún artículo de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil. Considero asimismo que el Código Civil no es aplicable en este punto, por tratarse de intereses de diferente naturaleza a los civiles\textsuperscript{144}.

\textsuperscript{143} Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de 26 de enero de 1998, RJ Aranzadi 1998/1059.

\textsuperscript{144} Consultar epígrafe 4.
9. La revocación de la Sentencia y el pago de intereses.

9.1. Planteamiento general.

Como toda resolución judicial (con carácter general), las relativas al pago de intereses pueden ser objeto de recurso y posterior resolución que la modifique. En caso de revocación, se planteará el problema de determinar si se deben pagar intereses procesales y desde qué fecha (desde la sentencia revocada o desde la que la revoca).

Pero es importante destacar que en la ejecución no rige el mismo sistema de recursos que en el proceso declarativo. En el proceso declarativo la norma general es la posibilidad de recurso de cualquier resolución o actuación judicial, ateniéndose a las normas del proceso civil. En el proceso de ejecución, sin embargo, el artículo 562.1.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil limita la posibilidad de apelación a los casos en que expresamente se prevea en la ley procesal.

La explicación de esta situación de limitación de recursos es que la ejecución es una actividad procesal estrictamente jurisdiccional y reglada, el Juez que ejecuta actúa en “sustitución” del ejecutado, que siempre podría actuar voluntariamente. Por ello, el Juez que ejecuta no puede realizar otros actos que los establecidos específicamente en la Ley ni recurrir a medios diferentes de los previstos en el Ordenamiento.

Según Illescas Rus, las resoluciones dictadas en la ejecución, tanto si se trata de autos como de providencias, son recurribles en reposición pero sin apelación. Es una excepción el auto que deniega el despacho de la ejecución, contra el que cabe recurso de apelación, con una potestativa reposición previa.

También es importante recordar que en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil los recursos no tienen el antiguamente señalado “efecto suspensivo”. El artículo 567 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, específico de la ejecución, establece que la interposición de recursos ordinarios no suspenderá, por sí misma, el curso de las

\[145\] Artículo 562 de la Ley de Enjuiciamiento Civil: “Impugnación de infracciones legales en el curso de la ejecución. 1. Con independencia de la oposición a la ejecución por el ejecutado según lo dispuesto en los artículos anteriores, todas las personas a que se refiere el artículo 538 podrán denunciar la infracción de normas que regulen los actos concretos del proceso de ejecución: 1. Por medio del recurso de reposición establecido en la presente Ley si la infracción constara o se cometiera en resolución del tribunal de la ejecución. 2. Por medio del recurso de apelación en los casos en que expresamente se prevea en esta Ley. 3. Mediante escrito dirigido al Juzgado si no existiera resolución expresa frente a la que recurrir. En el escrito se expresará con claridad la resolución o actuación que se pretende para remediar la infracción alegada”


\[147\] Illescas Rus, A.: Los recursos en la ejecución…, op.cit., pág 543.
actuaciones ejecutivas. Este último punto es importante, puesto que al no suspenderse el curso del procedimiento, no podrá solicitarse por el obligado al pago que se suspenda el devengo de intereses en tanto se resuelve el recurso. Es decir; una vez que comienzan a devengarse intereses, su devengo no cesa hasta el completo pago de la cantidad adeudada.

9.2. La revocación total

A diferencia de lo que ocurría en el artículo 921 de la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil, este supuesto no está específicamente regulado en el actual artículo 576 de la Ley 1/2000.

En la práctica, si bien no es frecuente el supuesto de revocación total e inversión de acreedor y deudor, es una cuestión que es de muy difícil solución. En estos casos de inversión de acreedor y deudor, quien estaba obligado a pagar por sentencia se convierte, en virtud del recurso, en quien debe cobrar y viceversa. Es el caso, por ejemplo, en que en la primera sentencia se estima la demanda y se desestima la reconvención y en segunda instancia se desestima la demanda y se estima la reconvención. Y si se ha ejecutado provisionalmente el supuesto se complica, puesto que quien ha cobrado deberá devolver lo obtenido y además abonar una cantidad al que en su momento le pagó.

Así, la Ley de Enjuiciamiento Civil se rige por el principio “quien pierde paga”, que es aplicable a las costas procesales y a los intereses.

Cuando se ha ejecutado provisionalmente una resolución y se han abonado el principal, los intereses y las costas, y la resolución es revocada, parece claro que el ejecutante deberá devolver todas estas cantidades. Pero, el que ha vencido en segunda instancia, ¿acaso tiene derecho a los intereses que generó la cantidad desde la primera instancia –que se dictó contra él- o únicamente desde la fecha de la resolución de la segunda instancia?

Realmente parece que ninguna de las soluciones es justa, puesto que quien ganó en primera instancia no debería pagar intereses desde la primera instancia, pero tampoco es justo que quien ganó la segunda no reciba intereses de la cantidad sino desde la resolución de la segunda instancia, puesto que económicamente no se le resarcir. Por otro lado, si bien el artículo 576.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece la obligación del Tribunal de segunda instancia de fijar los intereses, puede ocurrir (y ocurre habitualmente) que esta obligación no se cumpla, y que las partes no reparen en ello y no soliciten la aclaración de la Sentencia, con lo que la decisión recae sobre el Juez de instancia al ejecutar. Por ello pienso que no puede darse una

---

148 Sin perjuicio de que tuviera o no derecho a que le fueran resarcidos los intereses devengados durante la resolución del recurso si ésta excediere del plazo establecido para ello más allá de lo razonable, según el artículo 292 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: “los daños causados en cualesquiera de los bienes o derechos por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán a todos los perjudicados derecho a una indemnización a cargo del Estado”.
solución apriorística, sino que se debe estar al caso concreto para decidir la decisión más justa.

9.3. La revocación parcial

El artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en su apartado segundo, establece que, en los casos de revocación parcial, el tribunal resolverá sobre los intereses de demora procesal conforme a su prudente arbitrio, razonándolo al efecto.

Ello significa que en los casos en que el importe de la condena se fije definitivamente por la sentencia de segunda instancia o la de casación en una cantidad diferente a la fijada en la segunda instancia (revocación parcial), el tribunal superior, Audiencia o Tribunal Supremo deben resolver expresa y razonadamente sobre los intereses de demora procesal. Ello incluirá señalar el día en que se debe comenzar el cómputo\textsuperscript{149}, tal y como se desprende del artículo 576.2.

Pero el problema surge en los casos en que esto no se señala en la Sentencia que resuelve el recurso. A la hora de ejecutar, no queda claro desde cuándo deberán contar esos intereses. Si bien es posible para las partes solicitar aclaración o complemento de la Sentencia, cuando ello no se ha llevado a cabo habrá de interpretar la resolución el Tribunal que ejecuta, que es el que dictó la resolución que ha sido parcialmente recurrida.

Según la Ley de Enjuiciamiento Civil, por tanto, dependerá del arbitrio del Juez de segunda instancia, Audiencia Provincial o Tribunal Supremo, (que deberá motivar su resolución) desde qué fecha deberán devengarse intereses (resolución de primera instancia o de segunda), y cómo se ponderarán con los intereses ya devengados y cobrados.

La doctrina mayoritaria del Tribunal Supremo es condenar al pago de los intereses desde la sentencia de instancia. Así, la Sentencia de 8 de febrero de 2002\textsuperscript{150}.

En este caso el demandante solicita que se dicte sentencia por la que se condene a la demandada al pago de una cantidad más los intereses legales desde el origen de la deuda, con expresa imposición de costas a la demandada. La Sentencia de primera instancia estima parcialmente la demanda y condena a la demandada a abonar una cantidad menor de lo más los intereses legales desde la fecha de interposición de la demanda, sin hacer expresa imposición de costas. La Sentencia de Apelación revoca la de instancia y estima íntegramente la demanda, condenando al pago de otra cantidad más sus intereses legales incrementados en dos puntos desde la fecha en que le fue exigible dicho importe hasta su completo pago. Finalmente, el Tribunal Supremo condena a la demandada al pago de la cantidad inicialmente solicitada, la

\begin{footnote}
\textsuperscript{149} Vegas Torres, J.: Comentarios a la Ley De Enjuiciamiento Civil..., op.cit., págs 993 y 994.
\end{footnote}
cual devengará a favor del acreedor, desde la fecha de la primera instancia, un interés anual igual al del interés legal incrementado en dos puntos hasta que sea totalmente ejecutada.

Por citar un caso donde se evidencia hasta dónde puede llegar la complicación de un supuesto de revocación parcial, se estudiará la sentencia del Tribunal Supremo de ocho de junio 1993, en que existe revocación parcial en la Audiencia Provincial y posterior Sentencia del tribunal Supremo, se puede citar la Sentencia de este mismo tribunal de 8 de junio de 1993.151

9.4. La ejecución provisional

Una novedad de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 es establecer la posibilidad de ejecutar provisionalmente la sentencia dictada en primera instancia, aún sin ser firme, y sin tener que prestar caución. Así se establece en el artículo 526. Esta posibilidad rige en general, para todo tipo de sentencias, con las únicas excepciones de las sentencias que versen sobre las materias previstas en el artículo 525, que no se refieren en ningún caso a condenas al pago de cantidad líquida.

La ejecución provisional plantea dudas en torno a su relación con el instituto del interés procesal, porque, una vez entregada la cantidad objeto de la condena en la ejecución provisional, no parece razonable que la cantidad entregada genere intereses a favor de quien la ha percibido a partir de la firmeza de la sentencia (una vez ha sido confirmada).

La ejecución provisional permite la ejecución de la Sentencia o resolución igual que si fuera definitiva, lo que permite el pago de intereses procesales por mora. La

---

151 Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Ponente Teófilo Ortega Torres, de 8 de junio de 1993, número de sentencia 726/93, número de recurso 118/1991 Id Cendoj: 28079110011993101479, RJ Aranzadi 1993/4469. El caso fallado en esta Sentencia es el siguiente: se solicita en la demanda la resolución de una compraventa y, subsidiariamente, el cumplimiento y por tanto que se condene al demandado a pagar el precio con “sus intereses”, sin aclarar qué clase de intereses solicita. Asimismo se formula reconvención, en que también se solicita condena al actor al pago de una determinada cantidad, sin hacer mención a los intereses. En instancia se condenó al demandado a pagar el precio más los intereses “legales” desde la fecha de la demanda y los “legales incrementados en dos puntos” desde la sentencia. En apelación se revocó parcialmente la Sentencia de instancia, de modo que se estimó la reconvención condenando al actor al pago de los intereses “del artículo 921” desde la fecha de la Sentencia de la Audiencia Provincial. Finalmente el Tribunal Supremo inadmite el recurso de casación y considera correcta la decisión de la Audiencia Provincial por entender que “en la condena al demandado se computan intereses desde la presentación de la demanda y no así en la del actor por vía reconvencional en que, con expresa invocación del artículo 921, se resuelve que sólo deberán abonarse desde la fecha de la sentencia, lo que el recurrente considera trato desigual en su perjuicio, por lo que, en su opinión, procedería igualar las fechas de cómputo inicial. Pues bien, lo cierto es que lo decidido por la Audiencia es perfectamente correcto: en el caso de la cantidad a abonar por el Sr. Carlos Ramón se aplican los intereses moratorios desde la presentación de la demanda como es lo pertinente tratándose de la reclamación de una cantidad líquida, lo que no acontece, como ya se ha dicho, respecto a la suma que debe pagar el Sr. Tomás, razón por la cual, en este caso, sólo se aplica el interés sancionador o punitivo previsto en el artículo 921”.
Exposición de Motivos de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que “la regulación de la ejecución provisional es una de las principales innovaciones del texto legal…Esta Ley representa una decidida opción por la confianza en la Administración de Justicia y por la importancia de su impartición en primera instancia, y, de manera consecuente, considera provisionalmente ejecutables, las sentencias de condena dictadas en ese grado jurisdiccional. Así, la ejecución provisional será viable sin necesidad de prestar fianza ni caución…Es innegable que establecer, como regla, tal ejecución provisional de condenas dinerarias entraña el peligro de que quien se haya beneficiado de ella no sea luego capaz de devolver lo que haya percibido, si se revoca la sentencia provisionalmente ejecutada…en estos casos la ley no remite a un proceso declarativo para la compensación económica en caso de revocación de lo provisionalmente ejecutado, sino al procedimiento de apremio, ante el mismo órgano que ha tramitado o que está tramitando la ejecución forzosa provisional”.

Entiende Salinas Molina que “de entregarse por el ejecutado, en todo o en parte, la cantidad objeto de la condena provisionalmente ejecutada es dable entender que la misma no genera los intereses legales del artículo 576 a partir de la fecha de la entrega, pues no existiría el perjuicio en la demora que tienden a reparar y, además, confirmaría esta tesis la regla que en caso de revocación parcial de la sentencia condenatoria sólo obliga a devolver al ejecutante la diferencia entre la cantidad percibida y la que resulte de la confirmación parcial, con el incremento que resulte de aplicar a dicha diferencia, anualmente, desde el momento de la percepción, el tipo del interés legal del dinero (basa su argumentación en los artículos 533.2 y 536 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Personalmente, estoy totalmente de acuerdo con este punto de vista, dado que, al haber recibido el acreedor la cantidad objeto de la condena, desaparece la función del interés procesal.

---

152 Salinas Molina, F.: El proceso civil, op.cit. págs 5005 y 5007.
10. Conclusiones.

Tras el estudio de la doctrina y jurisprudencia relativa a los intereses procesales, se puede concluir que no existe unanimidad en cuanto a sus presupuestos, fundamento, naturaleza jurídica, compatibilidad con los intereses moratorios, procedimiento para su determinación ni cuantía.

En la relación del interés procesal con el moratorio, hay consenso en la doctrina y prácticamente existe unanimidad jurisprudencial en entender que se trata de institutos jurídicos diferentes e independientes. Así lo afirman la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo, existiendo únicamente determinados pronunciamientos discordantes en alguna Audiencia Provincial. También toda la doctrina consultada ha considerado figuras independientes los intereses moratorios de los procesales, haciendo referencia para su distinción, según el autor, a su distinta naturaleza, finalidad, regulación, caracteres o presupuestos. Al respecto de la compatibilidad entre intereses moratorios y procesales, no existe unanimidad doctrinal ni jurisprudencial, pudiendo agruparse las diversas posturas que resuelven el problema de qué intereses se devengan tras la sentencia en tres (se devengan solo procesales, solo los moratorios pactados o aquellos que tengan la cuantía más alta).

En referencia al fundamento del interés procesal, se ha considerado por los distintos autores y tribunales que es, o bien resarcitorio, o bien punitivo (sancionador), o incluso ambos.

En lo relativo a su naturaleza jurídica, existe unanimidad en destacar como característica fundamental de los intereses procesales su carácter ex lege. Donde se da la discrepancia es en el significado de este carácter ex lege. En la jurisprudencia del Tribunal Constitucional este principio se concreta en la innecesariedad de solicitar estos intereses en la demanda y en que no es incongruente la sentencia que no los menciona, pues en cualquier caso los está concediendo por efecto directo de la ley. El Tribunal Supremo ha asumido mayoritariamente la postura del Tribunal Constitucional, pero ha entendido en alguna sentencia aislada que no debían concederse intereses procesales desde la sentencia de primera instancia (y solo desde la de apelación), por no haberse solicitado. En cuanto a la doctrina, mayoritariamente defiende las mismas teorías antes expuestas, existiendo alguna discrepancia en el seno del procedimiento de ejecución, en cuanto a la necesidad o no de que se solicite la condena a intereses procesales en la demanda ejecutiva para que este pronunciamiento se incluya en el auto de ejecución.

Tratándose de la normativa jurídica aplicable, es indiscutido que el interés procesal se regula en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000. Sin
Intereses procesales e intereses moratorios en el ámbito civil. Pág.81/83

embargo, a la hora de centrar su ámbito de aplicación, no existe unanimidad en la doctrina en cuanto a si puede aplicarse fuera del proceso de ejecución (si cabe en el caso de cumplimiento voluntario de la sentencia), en cuanto a qué resoluciones judiciales debe aplicarse (solo sentencias o también autos y providencias), ni en cuanto al proceso de liquidación de los mismos.

En el capítulo a la cuantía, existe unanimidad doctrinal y jurisprudencial únicamente en el dies ad quem (se devengarán intereses hasta que la sentencia sea completamente ejecutada). Sin embargo, hay discrepancias entre los autores y los tribunales en el resto de materias relacionadas con la cuantía de los intereses procesales. Así, hay diversas posturas lo relativo al dies a quo (necesidad o no de la firmeza de la sentencia para el inicio del devengo), así como en cuanto al tipo de interés que debe aplicarse (el pactado en el contrato o el legal más dos puntos). En lo relativo a la cantidad a la que debe aplicarse el tipo de interés existen dos posturas (únicamente se devengarán intereses del principal o del principal más los intereses vencidos). En lo relativo al orden del pago en la ejecución también existen dos posturas, aunque una claramente minoritaria (pago de los intereses en primer lugar o del principal). Por último, en lo relativo a la posibilidad de aplicar el anatocismo al interés procesal existe también discrepancia sobre si devengan o no intereses los intereses procesales vencidos, aunque aquí el Tribunal Supremo está en contra en todas sus sentencias.

Por último, en el tema del devengo de los intereses procesales en caso de revocación de sentencia, la jurisprudencia mayoritaria entiende que se devengarán los intereses procesales desde la sentencia de instancia en caso de revocación parcial, pero en caso de que la revocación sea total deberá decidirse caso por caso.


CORTÉS DOMÍNGUEZ, V. y MORENO CATENA, V., (coordinadores), *La Nueva Ley de Enjuiciamiento Civil*, Tecnos, Madrid, 2000, Tomo IV.


Intereses procesales e intereses moratorios en el ámbito civil. Pág.83/83


**Lledó Yagüe, F.:** *Comentarios a la nueva LEC*, Editorial Dykinson, Madrid, 2000.


**Manresa Navarro, J.M.:** *Comentarios a la LEC*, 7ª Edición, Instituto Editorial Reus, Madrid.

**Martínez-Pereda Rodríguez, J.M.:** *Ley de Enjuiciamiento civil y leyes complementarias*, Colex, Madrid, 2005.


**Moreno Catena, V.:** *La ejecución civil*, Consejo General Poder judicial, Madrid, 2005.


**Ortiz Navacerrado, S.:** *Título ejecutivo y liquidez de las pólizas de crédito a efectos del despacho de ejecución*, Comares, Granada, 1992.

**Padura Ballesteros, M. T.:** Los intereses procesales por demora: su fundamento, régimen legal y jurisprudencia, Trivium, Madrid, 1.999.


**Prieto-Castro, L.:** *Tratado de derecho procesal civil, proceso declarativo y proceso de ejecución*, Segunda edición, Aranzadi, Pamplona, 1985.


**Santos Briz, J., Comentario del Código Civil*, Coord. Sierra Gil de la Cuesta, I., Segunda Edición, Tomo 6, Bosch, Barcelona, 2006.

**Vázquez Iruzieta, C.:** *Comentarios a la nueva LEC*, 1ª edición, Dijusa Editorial, Madrid.